



LAS CAUSAS DE SOLICITACIÓN EN CONFESIÓN*

GERARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SUMARIO. INTRODUCCIÓN. I. FASE INQUISITIVA. 1. La denuncia. a) La Instr. «Quae Supremus Pontifex». b) Regulación en el CIC 17 y en la Instr. de 1922. 2. Testimonio «de bono nominis». 3. Interrogatorios dispuestos por la Instr. «Non raro». 4. Conclusión de la fase inquisitiva. II. EL PROCESO PENAL ESPECIAL. 1 Algunas normas de procedimiento dictadas por la CDF. a) Citación e interrogatorio del sacerdote inculpado. b) Pruebas. c) Derecho de defensa. d) Obligación estricta de guardar secreto. 2. El proceso ante el tribunal diocesano, según las normas del CIC 17. 3. Proceso ante el tribunal de la Congregación. III. SENTENCIA. 1. Espontánea confesión. 2. Casos especiales. 3. Notificación de la sentencia dada por la CDF. 4. Apelación de la sentencia. IV. CONSIDERACIONES GENERALES A LA LUZ DE LA ACTUAL NORMATIVA. 1. Desarrollo de los procesos criminales ante los tribunales diocesanos. a) Tribunal unipersonal o colegiado. b) Derecho de defensa. c) Incorporación de las pruebas acusatorias y participación en los interrogatorios. d) La sentencia. 2. Constitución del tribunal y desarrollo de los procesos criminales en la CDF. 3. Propuestas conclusivas. ANEXOS. BIBLIOGRAFÍA. ÍNDICE DE LA TESIS DOCTORAL.

INTRODUCCIÓN**

Desde siempre, la Iglesia se ha preocupado de la pureza de la fe, y mediante sínodos y concilios, definía la recta doctrina y delataba a los herejes. Ya en el

* Director de la Tesis: Prof. Dr. Rafael RODRÍGUEZ-OCAÑA. Título: *Los delitos cometidos en la celebración de la Penitencia que competen a la Congregación de la Doctrina de la Fe*. Fecha de defensa: 8.VI.98.

** Las siglas utilizadas en este trabajo son:

art. / artt. artículo / artículos

AAS *Acta Apostolicae Sedis*, Commentarium Officiale, Romae 1909-1998

ASS *Actae Sanctae Sedis*, Romae 1865-1908

siglo XII, ante el difundirse de la herejía de los cátaros, Lucio III, con la Const. Ap. *Ad abolendam*, 4.XI.1184, decretó que todos los obispos estaban obligados a visitar dos veces al año, de persona o por medio de delegado, las respectivas diócesis para investigar (*inquirere*) las personas sospechosas o culpables de herejía¹.

Pero a partir del siglo XIII se van instituyendo en diversas regiones jueces delegados del Papa para enfrentarse a las doctrinas heréticas. Estos jueces o comisarios debían ejercer el *Sanctum Officium* de oponerse a los herejes. La expresión «santo oficio» originariamente responde a un determinado *munus* de los comisarios o inquisidores y no a un organismo o Dicasterio de la Santa Sede. Aunque estos inquisidores fueron enviados a diferentes países como delegados del poder papal, siempre permaneció el derecho de los Obispos de perseguir a los herejes en sus diócesis, derecho que ejercieron cumulativamente con estos inquisidores².

Más adelante, Sixto IV, con una Const. de 1.XI.1478, a instancias de los Reyes Católicos, instituyó la Inquisición española³. Pero fue con posterioridad,

c. / cc.	canon / cánones
CCEO	<i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i>
CDF	Congregatio pro Doctrina Fidei (a 28.VI.1988)
CIC 17	Codex Iuris Canonici, 1917
CIC	Codex Iuris Canonici, 1983
Com. Exe.	<i>Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico</i> , 1.ª ed., Pamplona 1996
Const. Ap.	Constitución Apostólica
Decr.	Decreto / Decretum
Instr.	Instrucción / Instructio
IS	PAULUS VI, m. p. <i>Integrae Servandae</i> 7.XII.1965: AAS 57 (1965) 952-955
ISR	SCSO, Instr. <i>Instructionis S. Romanae</i> , 6.VIII.1897: ASS 30 (1897-1898) 249-251
M. P. / m. p.	Litt. Ap. motu proprio datae
n. / nn.	número / números
NR	SCSO, Instr. <i>Non raro</i> , 20.VII.1890: ASS 25 (1892-1893) 451-454
PB	IOANNES PAULUS PP. II, Const. Ap. <i>Pastor Bonus</i> , 28.VI.1988: AAS 80 (1988) 841-912
QSP	SCSO, Instr. <i>Quae Supremus Pontifex</i> , 20.II.1867: ASS 3 (1867) 499-506
REU	PAULUS PP VI, Const. Ap. <i>Regimini Ecclesiae Universae</i> , 15.VIII.1967: AAS 59 (1967) 885-928
RGCR	Regolamento Generale della Curia Romana, 4.2.1992: AAS 84 (1992) 201-267
SCSO	Sacra Congregatio Sancti Officii (usque ad 7.XII.1965)
SP	BENEDICTO XIV, Const. Ap. <i>Sacramentum Poenitentiae</i> , 1.VI.1741: AAS 9 (1917) pars II, 505-508

1. Cfr. *Magnum Bullarium Romanum. Bullarum Privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum Amplissima collectio*, Romae 1745-Graz 1965, III, pars I, 9-10.

2. Cfr. N. DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1970, p. 90.

3. *Ibidem*, 92, nota 1.

con el nacimiento de la herejía luterana en el siglo XVI, cuando se constituyó un Tribunal de competencia en todo el Orbe para defender a la fe de esta herejía, que nace como consecuencia de la propagación de tribunales de la inquisición, delegados del Romano Pontífice, que debían suplir las negligencias de los Ordinarios del lugar⁴. Se trataba de un tribunal supremo y universal, delegado del Romano Pontífice, al cual los inquisidores esparcidos por el mundo estuvieron sujetos y del que recibieron normas y directrices de actuación⁵.

Desde el inicio, a este tribunal apostólico se le concedieron amplias competencias para juzgar de causas penales, en las que se incluirán no sólo los delitos cometidos estrictamente contra la fe, sino también los de abusos en la celebración de los sacramentos, como también algunos delitos contra la moral que, en determinadas circunstancias históricas, se han considerado de especial gravedad. En consecuencia lógica, la doctrina consideraba que era competencia de la SCSO una amplia lista de delitos⁶.

Con la reforma pío-benedictina (Const. Ap. *Sapienti Consilio* y CIC 17), no varía la competencia de la SCSO en materia penal: se confería de modo genérico «*eidem proinde soli manet iudicium de haeresi aliisque criminibus, quae suspensionem haeresi inducunt*»⁷, o, como prescribía el c. 247 § 2 CIC 17, «juzga de aquellos delitos que según su propia ley le están reservados, con potestad de conocer en estas causas criminales no sólo en grado de apelación del tribunal del Ordinario del lugar, sino también en primera instancia si le son directamente sometidas»⁸. Por otra parte, la doctrina señalaba que los límites de la competencia de esta Congregación eran difíciles de determinar, al estar presidida por el Romano Pontífice (c. 247 § 1 CIC 17)⁹.

En la renovación que realiza Pablo VI de la Curia Romana, la reforma paulina prescribió que la CDF era competente en los delitos contra la fe (n. 7 IS y art. 35 REU) y aquellos que ofendían el sacramento de la penitencia (n. 8 IS y

4. Cfr. D. BOUIX, *Tractatus de Curia Romana*, Parisiis 1880, 149.

5. Cfr. I.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus*, XV, II, *Relatio Romanae curiae forensis*, Lugduni 1617, Discursus XIV, n. 4-6; D. BOUIX, *Tractatus de Iudiciis Ecclesiasticis*, Parisiis 1884, 372-373; N. DEL RE, *La Curia Romana...*, 90.

6. Pueden verse en D. BOUIX, *Tractatus de Iudiciis...*, 379-380; M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici. De iudiciis ecclesiasticis*, Romae 1896-1901, IV, 541-542; U. NAVARRETE, *Commentarium in litteras Aspotolicas Integrae Sevandae*, en «Periodica» 55 (1966) 620.

7. Cfr. Pío X, Const. Ap. *Sapienti Consilio*, I, 1º 2: AAS 1 (1909) 9.

8. La doctrina, al comentar la competencia de la SCSO, elaboraba listas de delitos que le estaban reservados: cfr. G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, Romae 1961, II, 338; F. ROBERTI, *De Processibus*, Civitate Vaticana 1946, I, n. 162, II; F. DELLA ROCCA, *Instituciones de Derecho Procesal Canónico*, Buenos Aires 1950, n. 61, 141; H. JONE, *Commentarium in Codicem Iuris Canonici*, Paderborn, 1950, I, 409; A. VERMEERSCH-J. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, Passisis-Bruellis 1956, III, 8.

9. Cfr. F. ROBERTI, *De Processibus...*, I, n. 162.

art. 36 REU). La doctrina no hizo ninguna referencia a que esta regulación hubiese cambiado sustancialmente la competencia penal de la CDF que tuvo hasta esa fecha¹⁰.

El art. 52 PB, norma que regula actualmente la competencia penal de la CDF, constituye una novedad respecto a la IS y a la REU, al prescribir que la CDF «conoce de los delitos contra la fe y también de los delitos más graves, cometidos tanto contra la moral como en la celebración de los sacramentos, que hayan sido llevados a ella, y procede a declarar sanciones canónicas o a imponerlas a tenor del derecho, tanto común como propio, cuando sea necesario». El texto de este artículo, al regular la competencia penal de la Congregación, de una parte, engloba los nn. 7 y 8 IS (artt. 35 y 36 REU), y de otra, amplía la competencia a los delitos más graves cometidos contra la moral y los relacionados con la celebración de los sacramentos en general. El ámbito de la competencia jurídico descrito en este artículo es muy amplio. Visto en su conjunto, se podría afirmar que la mayor parte de los bienes jurídicos que protege el derecho penal del CIC están relacionados precisamente con la fe, con la moral y con la celebración de los sacramentos¹¹.

En este trabajo intentaremos dar algunas respuestas a los interrogantes que este art. 52 PB plantea sobre la existencia de normas procesales propias, funcionamiento interno dentro de la propia Congregación, derecho de defensa del inculpado, etc. relacionadas con el delito de sollicitación.

En las notas históricas que aparecen en el *Anuario Pontificio* viene indicado que «per i delitti contro la Fede il processo si svolge secondo le norme ordinarie del diritto; nei procedimenti in difesa del Sacramento della Penitenza si osservano norme speciali, come richiede la grande delicatezza della materia. In tutti i procedimenti è concessa la più ampia facoltà di difesa»¹².

Esta indicación del *Anuario Pontificio* está en la línea de lo que la CDF venía aplicando desde la reforma realizada por Pablo VI a mediados de los años 60. El n. 8 IS y el art. 36 REU indicaban explícitamente que la CDF tiene normas especiales de naturaleza procesal. La expresión *emendatas et probatas* indicaba

10. Cfr. U. NAVARRETE, *Commentarium in litteras...*, 647.

11. «La formula adoperata dall'art. 52 della nuova Costituzione Apostolica sulla Curia Romana e molto ampia, giacché accanto ai "delicta contra fidem" colloca i "delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa". Secondo questa nuova normativa, la Congregazione potrebbe giudicare praticamente di qualunque delitto canonico (si pensi all'estensione del concetto di "mores"), purché esso rientri nella discrezionale categoria dei "piu gravi" (...) La nuova legge della Curia quindi non soltanto conferma la competenza penale della Congregazione per la Dottrina della Fede, ma la amplia in modo praticamente illimitato»: C.J. ERRÁZURIZ, *La protezione giurico-penale dell'autenticità della fede*, en «Monitor Ecclesiasticus» 114 (1989) 119-120, nota 16.

12. Cfr. *Anuario Pontificio*, Città del Vaticano 1997, 1817. Indicaciones similares se encuentran en las otras ediciones del *Anuario Pontificio*.

que las normas procesales, promulgadas sólo para los Ordinarios del lugar, de las que se hablan en las disposiciones de Pablo VI, tenían y tienen una antigua tradición en la praxis de la CDF¹³. Esta forma de promulgación de las normas, ya contemplada tanto en el c. 9 CIC 17, sigue vigente en la legislación actual: c. 8 CIC 83 y c. 1489 § 1 CCEO, al establecer que en casos particulares se puede promulgar la ley de una manera distinta a la publicación en el boletín Oficial *Acta Apostolicae Sedis*.

Durante la vigencia del CIC 17, la CDF gozaba de la facultad de promulgar sus propias leyes procesales¹⁴; en efecto, en el sistema precedente a la REU, la Congregación se encontraba en una situación de primacía en relación a las otras Congregaciones: era llamada «Suprema» y el Romano Pontífice era su Prefecto (c. 247 § 1 CIC 17 y IS n. 2), por lo que resultaba difícil la distinción entre el ejercicio de la potestad legislativa, de la potestad administrativa y judicial. La REU estableció la igualdad entre las Congregaciones. Con la entrada en vigor de la PB, los Dicasterios de la Curia Romana sólo pueden legislar si tienen una delegación específica de la potestad legislativa (c. 30), o si la norma del Dicasterio tiene la aprobación de forma específica por parte del Romano Pontífice (art. 18 PB y arts. 109 y 110 RGCR).

Esta publicación restringida de algunas normas procesales —se refieren sobre todo al delito de solicitud en confesión— viene justificada según la doctrina, por la voluntad de armonizar la protección del bien público eclesiástico, la *salus animarum* y la inviolabilidad del sigilo sacramental, con el derecho de quien podría ser injustamente acusado de un delito, cuya defensa es particularmente difícil en estos casos. Como veremos más adelante, la CDF une la protección del sigilo sacramental con la no manifestación del nombre del denunciante y de los testigos al acusado, lo cual plantea alguna perplejidad en la doctrina al

13. Cfr. J. LLOBELL, *I delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede*, en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Le sanzioni nella Chiesa. XXIII Incontro di studio*. Abbazia di Maguzzano, 1-5 luglio 1996, Milano 1997, 244.

14. Vale la pena leer un párrafo en el cual se habla de esta posibilidad, entendiendo donde se dice praxis por lex, no sólo procesal sino también en materia penal: «S. Officium in sua praxi promulganda (pro clericis) aliud medium diversum ac per editionem in AAS (can. 9) eligere potuit, ut de facto elegit tradens (a. 1937) romanis Theologiae Moralis Magistris parvam "Institutionem" seu "Pro memoria" cum conceptu criminis pessimi eiusque reservatione ad S. Officium facta e forma processus contra delinquentes adhibenda, ad hoc ut horum notitia inter clericos spargeretur. Quod ex tunc temporis usque nunc satis superque impletum est per diversa media, speciatim 1) per manuales Theologiae Moralis et Iuris Canonici (...); 2) per lectiones Magistrorum (...); 3) per scripta de hac re in ephemeridibus edita; 4) per relationis huius flagitii factas in concessibus sacerdotum»: A. YANGUAS, *De crimine pessimo et de competentia S. Officii relate ad illud*, en «Revista Española de Derecho Canónico» 1 (1946) 438. Como indica algún autor, este modo de promulgar la ley, especialmente en materia penal, puede no ser suficientemente respetuoso con algunos elementos esenciales del concepto de ley y, por tanto, atacar la *rationabilitas*: cfr. J. LLOBELL, *I delitti riservati...*, 245.

chocar contra el derecho de defensa¹⁵. Por otra parte, el secreto de la norma procesal también viene justificado como una forma de proteger al sacerdote de acusaciones falsas bien orquestadas y para tutelar el derecho a la fama y a la intimidad del mismo¹⁶.

Otro de los asuntos que la discusión doctrinal ha puesto en evidencia es la oportunidad de la elección de utilizar la vía administrativa o la vía judicial a la hora de castigar un delito (c. 1341 CIC 83). Esta posibilidad de elección la tienen tanto la CDF como el Ordinario. En estos supuestos de delitos más graves en relación a la celebración del sacramento de la penitencia, a través de sus normas procesales propias, la Congregación siempre ha exigido que se siga la vía judicial¹⁷.

Para finalizar, también parece oportuno hacer observar otras dos cuestiones preliminares antes de pasar al estudio de las noticias que tenemos sobre las normas procesales. La primera cuestión se refiere a cuáles son los tribunales competentes en primera y en segunda instancia para enjuiciar estos delitos. Para dar una respuesta, como se trata de aplicar normas procesales, parece necesario acudir a lo que estaba dispuesto en la legislación canónica precedente. En el c. 1555 § 1 CIC 17 se afirmaba explícitamente que la reserva de un delito a la Congregación no comportaba la incompetencia de los tribunales inferiores. Por otra parte, el c. 247 § 2 CIC 17 establecía que la Congregación podía actuar tanto en primera instancia, como en apelación de las sentencias de los Ordinarios del lugar¹⁸. Los nuevos Códigos (CIC y CCEO), la PB y el RGCR, no indican si la reserva de los delitos en favor de la CDF a los que se hace mención en el c. 1362 § 1, 1º CIC y c. 1152 § 2, 1º CCEO es en primera o segunda instancia, o sólo cuando la causa es enviada a la Curia Romana¹⁹. Por otra parte, al tratarse de un delito que tradicionalmente llevaba la sospecha de herejía, históricamente los jueces natos en su persecución eran los que enjuiciaban las causas pertenecientes al Santo

15. Cfr. J. LLOBELL, *I delitti riservati...*, 250.

16. Cfr. *Ibidem*, 253.

17. «Tutti i «delicta graviora» la cui trattazione è riservata alla Congregazione devono seguire il processo giudiziario, anche se questo potrà avere elementi speciali, considerati i beni protetti, in particolare il sigillo sacramentale»: *Ibidem*, 257. Cfr. QSP, nn. 6-7.

18. Las normas propias aclaran que la reserva es absoluta en grado de apelación en relación tanto a los tribunales inferiores, como a la Rota Romana: cfr. J. LLOBELL, *I delitti riservati...*, 258. Cfr. QSP, nn. 6, 7, 14 y 16; NR, IV; ISR, n. 4.

19. «Tuttavia, essendo in vigore le norme processuali proprie della Congregazione, i delitti riservati possono essere giudicati dai tribunali periferici in prima, ma non in seconda istanza (...) Detta competenza del tribunale periferico di prima istanza può venire meno qualora: a) il delitto sia stato direttamente denunciato alla Congregazione per la dottrina della fede e il dicastero non abbia rinviato la causa al tribunale periferico; b) la Congregazione, in seguito all'obbligatoria notizia del delitto, data dall'Ordinario, abbia avvocato a sé la causa in prima istanza»: J. LLOBELL, *I delitti riservati...*, 258-259.

Oficio, es decir, los Ordinarios del lugar (con exclusión de los tribunales de los religiosos)²⁰ y la SCSO²¹.

La segunda cuestión que se nos plantea es si los Ordinarios deben juzgar los delitos reservados a la CDF según una ley procesal específica. Bajo el imperio del CIC 17 se decía explícitamente, en el c. 1555 § 1, que se debían seguir las normas procesales propias dictadas por la Congregación. El CIC no indica nada al respecto, no así el CCEO que en su c. 1056 prescribe que, «en las causas que están reservadas a un Dicasterio de la Santa Sede, los tribunales inferiores deben seguir las normas dictadas por el mismo Dicasterio».

Históricamente esta Congregación ha procedido a dictar normas para que los Ordinarios las tuvieran en cuenta a la hora de enjuiciar algunos de los delitos que pertenecían a su competencia. Así, la SCSO, en ejecución de la SP, tuvo siempre especial solicitud de que se procediera contra los sacerdotes solicitantes en forma judicial²². Como indicaba la doctrina, por la propia naturaleza de la administración del sacramento de la penitencia, el sacerdote tiene el derecho que este testigo singular, y a la vez acusador (el penitente), no se tenga en cuenta sin haber previamente discutido prudentemente la cuestión «*in foro iudiciali*»²³.

Es de notar que, por las circunstancias que concurren en este delito, la doctrina con frecuencia ha señalado las dificultades que se tienen el enjuiciar la solicitud en confesión siguiendo el orden judicial. A pesar de todo, la SCSO, al emanar las instrucciones que los Ordinarios e Inquisidores debían seguir en es-

20. En cuanto a la competencia de los tribunales de un instituto religioso clerical de derecho pontificio, hasta el CIC del 83 venía excluida esa intervención, siendo sólo competencia exclusiva del tribunal del Ordinario del lugar. Esta era la praxis multisecular de la Congregación hasta el CIC 83, cuyos datos más relevantes son: PAULO V, Const. Ap. *Romanus Pontifex*, 1.IX.1606, ordenó que los Superiores religiosos se abstuvieran de conocer de las causas de herejía y de sospecha de herejía, pues eran competentes los inquisidores delegados de la Santa Sede y los Ordinarios del lugar; en la SP de BENEDICTO XIV; QSP, *proemio* y n. 1, indicaba que este delito se debía denunciar a la Santa Sede o al Ordinario del lugar, excluyendo a los tribunales de los religiosos; decreto SCSO, del 15.V.1901: ASS 34 (1901/2) 383-384; c. 501 § 2 CIC 17. La doctrina opina que con la promulgación de los nuevos Códigos latinos y oriental parece que esta prohibición ha desaparecido, y es posible la intervención de los tribunales de religiosos cuando el denunciante y el acusado pertenezcan al mismo instituto religioso: «Inoltre, il CIC 1983 can. 1427 (CCEO can. 1069) consente l'intervento del tribunale dell'istituto religioso clericale di diritto pontificio qualora il denunciante appartenga allo stesso istituto dell'accusato, a differenza di quanto capitava sotto il regime del CIC 1917 can. 501 § 2»: J. LOBELL, *I delitti riservati...*, 258.

21. «Las intrusiones dadas se referían no sólo a los procesos instruidos por delegación del Santo Oficio, sino principalmente a los que habían de instruirse, discutirse y definirse en la Curia diocesana, pues jamás la Santa Sede sustrajo de la potestad de los Ordinarios el conocimiento de las causas de solicitud»: T. MUNIZ, *Procedimientos eclesiásticos*, Sevilla 1925, III, 570. Cfr. QSP, n. 16: ASS 3 (1867-1868) 504.

22. Cfr. M. LEGA, *Praelectiones...*, IV, n. 538, 549.

23. Cfr. *Ibidem*, IV, n. 538, 549.

tos casos, insistía en que se siguiera un procedimiento judicial como la mejor forma de proteger al sacerdote²⁴.

Una vez realizada la inquisición previa, el Ordinario debía decidir si había pruebas suficientes que indicasen la existencia del delito. En su caso, podía actuar de una doble forma: utilizar el procedimiento penal ordinario o enviar todo a la SCSO (actualmente CDF), para que en su caso dictara sentencia o indicase la forma de actuar. En el supuesto de que el Ordinario actuara como delegado de la Congregación, se debía atener estrictamente a lo que se le indicase en la delegación.

En estos casos, como señalaba Lega, ya a finales del siglo pasado se hizo general la práctica de que los Ordinarios se inhibiesen del conocimiento de estas causas de solicitación y transmitieran al Santo Oficio la denuncia y las declaraciones de los testigos. La razón de la inhibición y consulta se apoyaba en la costumbre de la SCSO de no proceder en juicio contra un sacerdote hasta la tercera denuncia (así venía recogido en la QSP)²⁵. La que podía ser primera denuncia en la Curia diocesana, para la SCSO podía representar la segunda o la tercera. Así, en la ISR se incluyó una cláusula en este sentido, al prescribir la obligación de transmitir al Santo Oficio lo actuado en la curia diocesana²⁶. Aunque en la praxis de la SCSO no se incoaba el juicio criminal sino a la tercera denuncia, nada impedía que después de la primera o segunda denuncia se procediera si constaba ciertamente el delito²⁷.

Esquemáticamente el proceso en las causas de solicitación se desarrollaba de la siguiente forma:

1) denuncia por parte de un penitente en forma ordinaria o en forma extraordinaria; 2) información sobre la credibilidad del denunciante y sobre su moralidad; 3) investigación de otros casos de solicitación por parte del mismo sacerdote, que aparezcan en la denuncia; 4) envío a la SCSO del acta de la denuncia, los testimonios de credibilidad y buena fama. La SCSO daba las instrucciones oportunas al Ordinario: vigilancia del sacerdote acusado, que se proceda judicialmente, que se busquen nuevas pruebas, etc.; 5) si se instaura el procedimiento judicial, se citaba al sacerdote reo, para que contestase a cada una de las acusaciones de solicitación; 6) si el delito aparecía como cierto, se daba sentencia contra el reo por parte del Ordinario; 7) la sentencia del Ordinario podía ser apelada a la SCSO²⁸.

24. Cfr. *Ibidem*, IV, n. 531, 538.

25. Cfr. QSP, n. 11: ASS 3 (1867-1868) 502-503.

26. Cfr. ISR, § V: ASS 30 (1897-1898) 249. Ver también M. LEGA, *Praelectiones...*, IV, n. 542, 558; T. MUNIZ, *Procedimientos...*, III, 570-571.

27. Cfr. F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis. De sacramentis*, Taurini-Romae 1953, II, n. 457, 468.

28. Cfr. *Ibidem*, 467-469.

Hacemos notar que las noticias que se tienen sobre las instrucciones que la SCSO ha ido enviando a los Ordinarios a lo largo del tiempo son muy parciales. Nuestro estudio se centrará en la Instrucciones que se dieron a fines del siglo pasado (1867, 1890 y 1897), haciendo referencia tanto a las noticias que se tienen de otras instrucciones previas a esas fechas, como a los cambios habidos en los años 1922²⁹ y 1962³⁰.

Con la Intr. *Quae Supremus Pontifex*, 20.II.1867, se daban las normas generales del procedimiento, así como un formulario para recibir las denuncias que debía utilizarse cuando el Obispo delegaba en un sacerdote sin intervención de notario³¹. La Instr. *Non raro*, 20.VII.1890, incluía las reglas que deben observarse cuando al recibirse una denuncia, aparecen otros casos de solicitud realizadas por el mismo delincuente a personas distintas de la denunciante, adjuntando un formulario especial donde se explicaba la forma de realizar las preguntas a estas personas que podían haber sido solicitadas, y que parecía que no habían hecho la denuncia³². La Instr. *Instructionis S. Romanae*, 6.VIII.1897, dio normas y formularios para recibir los testimonios de *bono nomine denunciantis*³³.

Estas instrucciones se centran en la fase inquisitoria del proceso penal, que integra: denuncia por parte del penitente solicitado, declaración del mismo, testigos que pudieran existir y su declaración, búsqueda de elementos que apoyen la denuncia, etc. Todo ello con la finalidad de conseguir la certeza moral de la existencia del delito, para el posterior castigo del sacerdote. Estas instrucciones decían muy poco de cómo se debía desarrollar el proceso judicial; se entendía que, mientras la SCSO no diera normas particulares al respecto, los Ordinarios

29. «This Instruction of 1922 is very similar to the previous Instructions issued by the Holy Office in 1866, 1890 and 1897. It was necessary however to introduce changes in order to adapt the various norms to the prescriptions of the Code»: H. LINENBERGER, *The false denunciation of an innocent confessor*, Washington 1949, 79, nota 26.

30. «This instruction, which is to be retained in the secret archive of the diocesan curia, was issued by Congregation (for the Doctrine of the Faith) in 1962, and is still normative for the investigation of this crime»: G. INGELS, *Processes which Govern the Application of Penalties*, en R.R. CALVO-N.J. KLINGER (ed.), *Clergy Procedural Handbook*, Washington, 1992, 213, nota 1. «Infatti, le “note storiche” dell’Annuario Pontificio continuano a citare l’Integrae servandae e le norme processuali proprie da esso previste in modo sostanzialmente uniforme dal 1967 al 1996, senza che la successiva promulgazione delle costituzioni apostoliche sulla Curia Romana (Regimini Ecclesiae Universae e Pastor bonus) abbia comportato qualche modifica rilevante al riguardo (cfr. Annuario Pontificio 1967, p. 1402; 1996, p. 1795)»: J. LLOBELL, *I delitti riservati...*, 270, nota 150; «Di fatto la Congregazione a tutt’oggi non ha ancora aggiornato, secondo il Codice de 1983 e la costituzione Pastor Bonus, le sue norme di procedura proprie per tali settori della sua competenza»: V. DE PAOLIS, *La collocazione della Congregazione per la Dottrina della Fede nella Curia Romana e la Ratio Agendi per l’Esame delle dottrine*, en «Periodica» 86 (1997) 589, nota 32.

31. El texto completo de esta instrucción se encuentra en el Anexo n. 2.

32. El texto completo de esta instrucción se encuentra en el Anexo n. 3.

33. El texto completo de esta instrucción se encuentra en el Anexo n. 4.

debían seguir las normas comunes a todo proceso criminal (desde 1917 esas normas comunes eran las del CIC)³⁴.

A continuación veremos la forma que el Ordinario debía seguir a tenor de estas instrucciones, para finalizar con una crítica valorativa a tenor de las disposiciones del CIC 83 y de la PB.

I. FASE INQUISITIVA

La forma de proceder que indicaban esas instrucciones era la siguiente:

a) denuncia del penitente ante el Ordinario o su delegado especial con esta finalidad: redacción del acta de denuncia, donde se indican todos los pormenores de los hechos; b) se procedía a recibir los testimonios de *bono nomine denunciantis* para comprobar la credibilidad del denunciante; c) investigación de otras solicitudes realizadas por el mismo sacerdote a otras personas, en el caso de que en la denuncia del penitente se diera noticia de ellas.

1. La denuncia

Tanto las instrucciones, como la praxis de la SCSO, era que la obligación de denunciar era personal y debía ser hecha por la misma persona solicitada; pero si había gravísimas dificultades para comparecer personalmente, podía acudir al Ordinario, a la SPA o a la SCSO por medio de carta o de tercera persona, exponiendo todas las circunstancias y conduciéndose después según las instrucciones que se recibieran³⁵.

El término denuncia se entendía como la manifestación ante el juez legítimo de la comisión de un delito, para que criminalmente proceda³⁶. Se podían dar una doble forma de denunciar: simple y judicial. La simple es la que se realiza extrajudicialmente, por ejemplo, a través de tercera persona o en carta. La denuncia judicial o en forma se realiza cuando el denunciante comparece por sí mismo ante el obispo o su delegado especial, asistido o no de notario sacerdote.

La praxis de la SCSO era que las denuncias se debían hacer en forma judicial. Cuando en la SCSO se tenían conocimiento de denuncias simples de solicitud por medio de cartas en donde se indicaban los datos del denunciante, la

34. «Ordinarii locorum in processu contra sollicitantes servare debent uti praeceptivas normas a S. Officio traditas, non vero uti mere directivas, prout nonnulli ante Codicem putabant. Sane c. 1555, § 1 [CIC 17]»: F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis...*, II, n. 458, 469.

35. Cfr. QSP, n. 7: ASS 3 (1867-1868) 501.

36. Cfr. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, Taurini-Romae 1955, IV, n. 2123.

praxis de la SCSO era enviarlas a los respectivos Ordinarios para que se obtuviera la denuncia «en forma», o judicial, por parte del penitente³⁷. De igual manera, cuando se recibían denuncias a través de terceras personas, el Ordinario debía hacer lo posible para que se realizase en forma judicial. Estos casos, como indicaba Pignatelli, podían suceder cuando el penitente por diversos motivos no quería realizar la denuncia ante el Ordinario, y por medio de tercera persona (solía ser un sacerdote) pidiese la posibilidad de realizar la denuncia de forma extraordinaria, es decir ante un sacerdote delegado sin la intervención de notario³⁸.

Con los datos que aparecían en la denuncia, el Ordinario debía decidir si había elementos suficientes para determinar la prosecución en la inquisición del delito: si era necesario recoger los testimonios de *bono nomine* y las declaraciones de otras personas que hayan podido ser solicitadas por el mismo sacerdote.

Cuando en la Curia diocesana o en la SCSO se recibían denuncias anónimas, la praxis de la SCSO antes de la publicación del CIC 17, era de no darles algún valor: así lo manifestaba claramente la QSP³⁹. Con posterioridad a la publicación de este Código, y a tenor de lo que prescribía en su c. 1942 § 2 CIC 17 donde se admitían las denuncias que proceden de un enemigo manifiesto o de una persona vil o indigna, o las denuncias anónimas, si se hallan rodeadas de tales circunstancias y otros elementos que hagan tal vez probable la acusación; la SCSO, en su Instr. de 1922, admitía estas denuncias anónimas como una prueba, cuando estuvieran rodeadas de estas circunstancias, modificando así lo que había establecido en la QSP⁴⁰.

a) *La Instr. «Quae Supremus Pontifex»*

En la QSP se insistía en que las denuncias de solicitud se debían realizar *in iudicio*, ante el Obispo o su delegado con intervención de notario, que debía consignar por escrito el nombre, apellidos y señas del denunciante y denunciado, y el delito con todas sus circunstancias, firmándose el acta por el denunciante, por el Obispo o su delegado y por el notario. El nombramiento del delegado y del notario se debía hacer por escrito, y era el primer documento que aparecía en el proceso⁴¹.

Cuando el Ordinario delegase en otro y no fuera posible que estuviera asistido de notario para recibir la denuncia, ya porque no haya sacerdote competen-

37. Cfr. *Ibidem*.

38. Cfr. J. PIGNATELLI, *Consultationes canonicae*, Coloniae Allobrogum 1718, I, Consulta 104, 128.

39. Cfr. QSP, n. 6: ASS 3 (1867-1868) 501.

40. Cfr. H. LINENBERGER, *The false denunciation...*, 82.

41. Cfr. QSP, n. 6: ASS 3 (1867-1868) 501.

te que pudiera serlo, ya porque el denunciante se resistiera a que interviniera otra persona, el Ordinario podía prescindir de la asistencia del notario, pero debía consignarlo así en el escrito de delegación. Con mayor motivo, en estos casos el Ordinario debía escoger por delegado a un sacerdote competente, *maxime idoneus*, al que debía instruir sobre el modo de recibir la denuncia, dándole copia del formulario pertinente y advirtiéndole que por ningún concepto podía asistir al acto ninguna otra persona, y que la denuncia se hiciera en lugar donde no se puedan infundir sospechas, por ejemplo, en la sacristía de la iglesia. Además, el Ordinario debía amonestarle para que el acta de la denuncia la remitiera cuanto antes y por los medios más seguros al propio Ordinario, no quedándose con copia o vestigio alguno de ella⁴².

Esta recepción de denuncias de solicitación en forma extraordinaria, es decir, sin intervención de notario, ya se toleraba desde antiguo, y la SCSO dio instrucciones pertinentes a los Ordinarios sobre cómo proceder cuando llegaban. La primera noticia que tenemos de una de estas instrucciones la da Pignatelli; es una instrucción del Sínodo diocesano Lycensis de 1669. Las normas de la instrucción de 1669 eran similares a las enviadas a todos los Ordinarios al final de la QSP: el sacerdote delegado debía atenerse estrictamente al *Modus*, o formulario, que la SCSO transmitía al final de esta última instrucción⁴³.

En los casos de denuncia judicial realizada en forma extraordinaria, se procedía del siguiente modo:

a) el Ordinario delegaba por escrito⁴⁴ en un sacerdote *maxime idoneus* al que debía instruir sobre el modo de recibir la denuncia, dándole copia del formulario pertinente. El escrito de delegación era imprescindible y se le comunicaba previamente al penitente antes de recibir su denuncia⁴⁵;

b) acta de denuncia⁴⁶. En ella se debía indicar los datos precisos para determinar quien era el denunciante (describiéndole en su caso), así como el sacerdote denunciado (indicando el lugar donde se produjo la solicitación), y de las pa-

42. Cfr. QSP, n. 8: ASS 3 (1867-1868) 501-502.

43. Puede verse completa en el Anexo n. 2, QSP, *Modus*. Para el formulario que transmitía Pignatelli, ver Anexo n. 1.

44. «*Obispado de...: Por el presente damos a usted comisión para que asistido del sacerdote N. como notario (o sin intervención de notario), proceda a recibir de N. una denuncia de solicitación in confessione, después de prestar apud acta (o en nuestras manos) el juramento de cumplir bien y fielmente esta comisión y de guardar el más absoluto secreto. La denuncia la recibirá V. al tenor del adjunto formulario y nos la remitirá a la mayor brevedad posible, por conducto seguro y sin que quede en su poder rastro alguno de ella. –Dios, etc. –N. Obispo de N. –Sr. D.:*» T. MUNIZ, *Procedimientos...*, III, n. 668, 574.

45. Cfr. J. PIGNATELLI, *Consultationes...*, I, Consulta 104, 128; QSP, *Modus*: ASS 3 (1867-1868) 505.

46. Pignatelli transmitía una fórmula de denuncia: J. PIGNATELLI, *Consultationes...*, I, Consulta 104, 129.

labras, signos y otras circunstancias que hicieran posible la comprobación de la existencia de la solicitud. Si de las palabras que el denunciante pronunciaba, las circunstancias del delito no quedaban claras, el sacerdote delegado debía realizar el interrogatorio para que quedase lo más claro posible⁴⁷;

c) además de las preguntas que el sacerdote delegado considerase oportunas realizar para esclarecer todo lo que se refería a la solicitud, debía preguntar al penitente denunciante de: los motivos por los que realizaba la denuncia y si tenía algún motivo de enemistad con el sacerdote; si tenía conocimiento de que hubiera otras personas que hubiesen sido solicitadas por ese sacerdote; de la fama que dicho sacerdote tenía ante el penitente y ante otros; si había realizado la denuncia más tarde de un mes, el motivo de ese retraso⁴⁸;

d) el acta de denuncia se terminaba jurando el denunciante de guardar secreto y suscribiendo la denuncia. Posteriormente el sacerdote delegado debía firmar el acta⁴⁹.

En cuanto al lugar donde realizar la denuncia, debía tratarse de un sitio donde no se pudieran infundir sospechas, por ejemplo, en la sacristía de la iglesia⁵⁰.

De la denuncia se debía guardar el más estricto silencio, el Ordinario debía advertir al sacerdote delegado que por ningún concepto podía asistir al acto ninguna otra persona; amonestándole para que el acta de la denuncia la remitiese cuanto antes y por los medios más seguros al propio Ordinario, no pudiéndose quedar con copia o vestigio alguno de ella⁵¹.

b) Regulación en el CIC 17 y en la Instr. de 1922

Como ya hemos indicado, en 1922 la SCSO envía una nueva instrucción a los Ordinarios en los que se tiene en cuenta las prescripciones del CIC 17, y por la que sustituye a la QSP⁵².

47. Cfr. J. PIGNATELLI, *Consultationes...*, I, Consulta 104, 128; QSP, *Modus*: ASS 3 (1867-1868) 505.

48. Cfr. J. PIGNATELLI, *Consultationes...*, I, Consulta 104, 128; QSP, *Modus*: ASS 3 (1867-1868) 505-506.

49. Cfr. J. PIGNATELLI, *Consultationes...*, I, Consulta 104, 128-129; QSP, *Modus*: ASS 3 (1867-1868) 506.

50. Cfr. T. MUNIZ, *Procedimientos...*, III, 568. En la instrucción que Pignatelli transmitía, se indicaba que debía hacerse fuera de la confesión sacramental, y a ser posible en lugar distinto de donde se solía confesar (confesionario u otros lugares destinados con ese fin): J. PIGNATELLI, *Consultationes...*, I, Consulta 104, 128. Linenberger nos indica que la doctrina anterior al CIC 17 estaba dividida si el sacerdote delegado podía utilizar el confesionario para recibir estas denuncias: Cfr. H. LINENBERGER, *The false denunciation...*, 80.

51. Cfr. QSP, n. 8: ASS 3 (1867-1868) 502.

52. Cfr. H. LINENBERGER, *The false denunciation...*, 103.

Las únicas noticias que tenemos de esta Instr. de 1922 en esta materia de la forma de realizar las denuncias son:

a) la denuncia debía realizarse en forma judicial⁵³;

b) en cuanto a posibilidad de realizar la denuncia a través de un confesor delegado y sin la intervención de notario, se nos indicaba que ésta se podía realizar en el confesionario⁵⁴.

No tenemos otros datos de variaciones que se hubieran producido en esta fase: la parte más interesante de la fase inquisitiva en relación a la denuncia del penitente consistía en el formulario de preguntas que se debían realizar al denunciante, para que su declaración-denuncia quedara perfectamente depurada, especialmente cuando se recibían las denuncias a través de un confesor delegado del obispo sin intervención de notario: podemos pensar que la forma de proceder y el interrogatorio que indicaba la QSP en su *Modus* no habrían sufrido variaciones de relevancia.

2. Testimonio «de bono nominis»

Como el delito de sollicitación en confesión se comete generalmente en secreto, es casi imposible hallar dos testigos que depongan sobre un mismo hecho, y así la prueba ha de hacerse con la declaración de un testigo, el denunciante, y con otros indicios y adminículos que puedan hallarse⁵⁵. Como esta forma de proceder no es la regla general en los juicios (c. 1791 CIC 17 y c. 1573 CIC 83), el testimonio del denunciante ha de quedar muy depurado; y no sería suficiente que el mismo Ordinario o su delegado garantizase la probidad e imparcialidad del testigo, sino que es de todo punto necesario que ello conste en acta y en forma judicial⁵⁶.

Para probar que la persona denunciante era digna de fe⁵⁷ y no se movía por enemistad u otro afecto humano, el Ordinario o su especial delegado debía llamar a dos testigos, sacerdotes si era posible, que conocieran al denunciante y al denunciado; no debían llamarse más que dos testigos, pero si los dos únicos lla-

53. «The Instructions of the Holy Office, before as well as after the Code, indicate the manner of introducing a criminal trial by way of the judicial denunciation. The denunciation mentioned in canon 1936 does not correspond to the one demanded by the Pagella of 1922»: H. LINENBERGER, *The false denunciation...*, 105-106. «Because the stricness of the Instruction of 1922 only judicial denunciations can serve as a basis for an inquest by the local Ordinary and for a subsequent accusation by the promotor iustitiae in cases involvig the crime of sollicitation»: *Ibidem*, 111.

54. «The Instruction of 1922 suggest that the confessional be used»: *Ibidem*, 80-81.

55. Cfr. J. PIGNATELLI, *Consultationes...*, I, Consulta 104, 128; QSP, n. 10: ASS 3 (1867-1868) 502.

56. Cfr. T. MUNIZ, *Procedimientos...*, III, 568.

57. Cfr. QSP, n. 10: ASS 3 (1867-1868) 502.

mados no conocían suficientemente al denunciante y denunciado, se llamaba a un tercero⁵⁸, hasta conseguir dos testigos que diesen testimonio tanto del denunciante como del denunciado⁵⁹.

A los testigos no se les daba a conocer la denuncia, ni siquiera se les advertía que se trataba de un proceso de solicitud; única y exclusivamente se les preguntaba por la buena fama y estimación del denunciado y denunciante, por la veracidad de éste y motivos o sospechas de enemistad entre ambos⁶⁰.

La fórmula del interrogatorio de estos testigos era la siguiente: encabezamiento donde se indicaba lugar donde se realizaba el interrogatorio, ante quién se realizaba y los datos de la persona interrogada; si conocía al sacerdote y la estimación que tenía de su *vita et moribus*; si conocía al denunciante (o denunciantes), la estimación que tenía de su *vita et moribus*; si eran dignos de fe en sus declaraciones, si conocía que existiera alguna enemistad entre estas personas y el sacerdote anteriormente dicho⁶¹.

Se terminaba el acto con un nuevo juramento, por parte del testigo, de guardar secreto del Santo Oficio y firmaba su declaración. Al acta se añadía la firma del sacerdote delegado que había recibido el testimonio⁶².

A los testigos de *vita et moribus* no se les indicaba nunca el conflicto existente entre el sacerdote y otras personas, por el que se les había llamado a declarar.

3. *Interrogatorios dispuestos por la Instr. «Non raro»*

Si en la denuncia que se recibía aparecían otras personas, el Ordinario, no el sacerdote delegado⁶³, debía proceder a examinarlas, o delegar para que sean examinadas en forma judicial. Como solían tratarse de solicitudes que, por cualquier causa, el penitente no había cumplido con el deber de denunciar, se debía actuar con suma cautela, para evitar todo daño o escándalo a los fieles⁶⁴. Por este motivo, la SCSO envió una intrucción en 1890 para examinar a los penitentes que, en una denuncia de solicitud, eran mencionados como víctimas, también ellos de solicitud por parte del mismo confesor.

58. Cfr. ISR, §§ V y VII: ASS 30 (1897-1898) 249-250.

59. «Si duo testes reperiri nequeant, qui una simul denuntiatum et omnes et singulos denunciantes noverint, *plures* vocari debent, ita ut *duplex* testimonium circa denuntiatum et unumquemque denuntientem habeatur»: F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis...*, II, n. 457, 468.

60. Cfr. QSP, nn. 10-11: ASS 3 (1867-1868) 502-503; T. MUNIZ, *Procedimientos...*, III, 569.

61. Cfr. ISR, § IX, nn. 3-6: ASS 30 (1897-1898) 250-251.

62. Cfr. ISR, § IX: ASS 30 (1897-1898) 251.

63. El Obispo podía delegar al mismo sacerdote para recibir estas otras denuncias de solicitud.

64. Cfr. QSP, n. 9: ASS 3 (1867-1868) 502.

El tenor de la instrucción era el siguiente: los jueces delegados debían examinar a estos penitentes de forma judicial; debían estar asistidos de notario y sin presencia de testigos. Por la misma naturaleza del asunto, el lugar donde se debía efectuar el examen de estas personas era el más oportuno: la Curia eclesiástica, una casa particular, etc.⁶⁵

La forma de proceder para examinar a estas otras personas aludidas en una denuncia de solicitación era la siguiente:

a) se le convocaba a un lugar oportuno para ser interrogada; debía realizar juramento, sobre los Santos Evangelios, de decir la verdad;

b) se realizaba un examen general para comprobar si había elementos para suponer que había sido solicitado. En concreto se le preguntaba: si se imaginaba el motivo por el que había sido llamado; desde cuándo se confesaba, la frecuencia y si lo hacía con uno o varios sacerdotes; si los consejos que había recibido de los confesores siempre le habían dirigido al bien; en el supuesto de que respondiera que siempre había sido bien dirigida, se le debía preguntar si sabía, recordaba que alguien hubiera dicho que algún confesor no se había comportado recta y santamente y que esto no había sido fruto de murmuración o de palabras denigratorias contra el sacerdote⁶⁶;

c) si la respuesta era que no sabía nada, se concluía aquí el examen. Si decía algo contra algún confesor, se seguía el interrogatorio, y se le preguntaba: los datos para identificar al confesor; sobre lo que había oído que ha realizado ese confesor: antes, después o con ocasión de la confesión; de qué hechos se trataba. El juez debía transmitir fielmente las palabras que indicaba el interrogado. Si advirtiera en el ánimo del penitente temor por decir la verdad, se le aseguraba que todo permanecería en secreto. El juez debía preguntar sobre el tiempo en que comenzó la solicitación, duración, etc. Se debía de abstener de preguntar sobre el consenso del penitente; sobre si había oído que dicho confesor había solicitado a otras personas, y en su caso de quienes se trataba; de la fama que tenía dicho confesor; si se había movido por justicia, o si tenía alguna enemistad u odio contra el sacerdote⁶⁷.

El interrogatorio se terminaba con el juramento sobre los Santos Evangelios, de guardar silencio, y firmando la declaración. Al final firmaba el juez que interrogaba y el notario que levantaba acta. En el supuesto de que aparecieran otras personas como solicitadas, podían ser llamadas a declarar en la forma descrita *supra*⁶⁸.

65. Cfr. NR: ASS 25 (1892-1893) 451-452.

66. Cfr. NR: ASS 25 (1892-1893) 452-453.

67. Cfr. NR: ASS 25 (1892-1893) 453-454.

68. Cfr. NR: ASS 25 (1892-1893) 454.

4. Conclusión de la fase inquisitiva

El Ordinario, al finalizar la fase inquisitiva podía actuar de una triple forma⁶⁹:

a) archivar todo lo actuado, al comprobarse que no había elementos suficientes para demostrar que se había producido realmente una solicitud, o porque se había puesto de manifiesto en las declaraciones que el denunciante actuaba con intenciones menos rectas de enemistad u odio contra el sacerdote que hacían dudar fuertemente de la veracidad de su denuncia;

b) enviar a la SCSO todos los testimonios recogidos junto con la denuncia del penitente, y esperar la respuesta de la SCSO para saber como debía actuar;

c) instruir el proceso criminal, pasando las actas de la investigación al promotor de justicia, para que éste presentase ante el juez el escrito acusatorio.

A finales del siglo pasado se hizo general la práctica de que los Ordinarios se inhibiesen del conocimiento de estas causas y transmitiesen la denuncia y las declaraciones de los testigos al Santo Oficio, esperando una respuesta de cómo debían proceder.

Reunidas las actas de denuncia, de declaraciones de otras personas aludidas en ella, y la de los dos testigos de *bonus nomen*, el Ordinario ponía al pie de ellas el decreto mandando transmitir las a la SCSO⁷⁰. De todo se hacía copia auténtica por el mismo notario que había actuado o en su defecto por el Canciller de la Curia, previo juramento de hacerlo fielmente y de guardar el secreto del Santo Oficio. El original o la copia, visada y sellada, se remitía a la SCSO en pliego certificado, o bajo sobre lacrado a persona de entera confianza que lo llevase a destino⁷¹.

69. De forma similar se pronunciaba el c. 1946 CIC 17 y los actuales c. 1718 CIC 83 y c. 1469 CCEO.

70. «Diligencias de transmisión de las actas al Santo Oficio: a) decreto episcopal; b) cabeza y pie del testimonio; c) letras remisorias.

a) *Locus, dies, mensis et annus*. –Actorum, de quibus supra, per Cancellarium huius Curiae episcopalis, sub iuramento de munere fideliter obuendo et secreto servando, conficiatur authenticum exemplar, quod transmittatur ad Sacram Congregationem Scti. Officii (vel quod servetur in archivo secreto huius Curiae). N. Episcopus N.

b) *Locus, dies, mensis annus*. –Ego N. Cancellarius Curiae Episcopalis N. testor me actuum originalium, quae a Rvmo. Ordinario mihi exhibita fuerunt, hoc authenticum exemplar confecisse, scilicet: (se copia íntegro todo el proceso desde la primera a la última diligencia). –Quae omnia de littera ad litteram ex actis originalibus, quae ipsi Rvdo. Ordinario reddita fuerunt, ego infraescriptus Cancellarius. –Visum N. Episcopus N. (*sigillum Curiae*).

c) Ad Emum. Patrem S.R.E. Cardinalem, S. Congr. Scti. Officii Secretarium. Ad istam Sacram Congregationem reverenter transmitto acta originalia (vel authenticum exemplar) cuiusdam processum in causa sollicitationes. De denunciatio nihil invenitur in archivo secreto huius Curiae. –Eminentiae Vestrae addicit. servus. – N. Episcopus N. –*Locus, dies, mensis et annus*. –*Sigillum*»: T. MUNIZ, *Procedimientos...*, III, 579-580.

71. Cfr. *Ibidem*, 571.

Como respuesta a estas consultas por parte de los Ordinarios, la SCSO daba instrucciones diversas según los casos: ya que se vigile al denunciado, ya que se le amoneste; que se le invite a declararse culpable, si lo es; que se le aplique tal remedio o tal pena, etc.⁷².

La conducta del Ordinario en los casos en que se recibía el encargo especial del Santo Oficio para practicar alguna diligencia o para ejecutar la sentencia, debía ser la de atenerse estrictamente a la letra del rescripto, además de guardar secreto aunque no se le advirtiese⁷³.

II. EL PROCESO PENAL ESPECIAL

Una vez decidido por el Ordinario del lugar o por la SCSO la apertura del proceso criminal, entramos en la fase del desarrollo normal como cualquier proceso criminal. En la QSP, se daba la forma de actuar que debía adoptar el Ordinario para continuar con la causa. Con la entrada en vigor del CIC 17, algunos de estos pasos se modificaron para amoldarse a las prescripciones de este Código; las nuevas normas se dieron con la Instr. de 1922.

En los siguientes apartados veremos las actuaciones encomendadas al Ordinario, o al juez delegado, explicando en primer lugar el procedimiento a seguir según la QSP, para estudiar después qué cambios se produjeron a consecuencia de la promulgación del CIC 17.

1. *Algunas normas de procedimiento dictadas por la CDF*

a) *Citación e interrogatorio del sacerdote inculpado*

Pocas noticias aparecen en la QSP. Esta norma indicaba que al sacerdote denunciado, se le debía llamar en juicio, y en presencia del juez y con intervención de sacerdotes, que realizasen la función de notarios, una vez que hubiese efectuado juramento de decir la verdad debía responder sobre cada una de las denuncias de solicitación así como de las pruebas⁷⁴. En el interrogatorio se debía

72. Cfr. T. MUNIZ, *Procedimientos...*, III, 571. Lega da noticia de una carta enviada por el SCSO al Ordinario donde se contiene la sentencia condenatoria: «Praevia abiuratione DE VEHEMENTI, impositis poenitentis salutaribus inter quas peragat exercitia spiritualia, quo tempore maneat suspensus a celebratione missae et praevia suspensione ab audiendis sacramentalibus confessionibus inconsulta S. Congr., Sac... dimittatur et si complicem absolverit, recurrat ad S. Poenitentiarium»: M. LEGA, *Praelectiones...*, IV, n. 543, 560.

73. Cfr. T. MUNIZ, *Procedimientos...*, III, 571-572.

74. En las instrucciones no venía indicado si el sacerdote inculpado se podía ayudar de un abogado en su defensa.

tener muy en cuenta de no manifestar el nombre del denunciante y que el sacerdote reo de ningún modo violase el sigilo sacramental⁷⁵.

En cuanto a la deposición del reo, en el supuesto de que por inadvertencia se revelase el sigilo sacramental no debía quedar en las actas del interrogatorio⁷⁶.

Podía ocurrir que el reo confesase su delito. En este caso se le imponían aquellas penitencias y remedios penales oportunos para evitar las posibles futuras ocasiones y recaídas⁷⁷.

Tras la promulgación del CIC 17, en la Instr. de 1922 aparecía la siguiente modificación: al realizar el interrogatorio al sacerdote inculpado, no se le podía obligar a que realizase un juramento de decir la verdad: esta indicación venía prohibida por el c. 1744 CIC 17, que señalaba «en las causas criminales, el juez no puede imponer al acusado el juramento de decir la verdad»⁷⁸.

75. Cfr. QSP, n. 11: ASS 3 (1867-1868) 503. «Denunciatum et testium nomina reo nunquam sunt manifestanda. Est enim ratio procedendi stricte inquisitiva»: M. LEGA, *Praelectiones...*, IV, n. 542, 558.

76. «La Santità de N. S. e questi miei Eminentissimi colleghi generali Inquisitori considerando, che i rei di sollecitazione nelle sacramentali confessioni facilmente possono incorrere, o nelle spontanee comparse, o nei costituiti, nella rivelazioni delle confessioni sacramentali senza fare riflessione alla violazione del sigillo sacramentale, che è de iure divino, e indispensabile per qualsiasi gravissima causa anco di eresia, hanno perciò stimato espediente di rinnovare a cautela gli avvertimenti altre volte datisi a V. S. che a tutti gli altri Vescovi, e Inquisitori d'Italia, acciò nelli processi di sollecitazione nelle sacramentali confessioni li pretesi rei sollicitanti, o nei costituiti, non rivelino, anco innocentemente le confessioni, con dire: Confessandosi da me la tale di pensieri, o atti disoneste, le disse, etc. Ma procedendo V. S. colla solita sua attenzione, ammonirà li sponte comparenti, o rei costituiti a non deporre cosa alcuna, che concerna il sigillo delle sacramentali confessioni de' penitenti, ma di riferire solamente ciò, che riguarda il detto, o fatto di essi sollicitanti, in occasione di aver amministrato il Sacramento della Penitenza, o immediatamente avanti, o dopo, o nel confessionario, o sotto pretesto di confessione, e perciò dovranno semplicemente i sollicitanti deporre: confessandosi da me N. N. le disse etc. o feci etc. senza dir altro in ordine alla confessione de' penitenti, e se cadessero nel detto errore di rivelare le confessioni, non si dovrà la loro deposizione in questa parte scrivere in processo, e se mai per inavvertenza di qualche ministro, che acutamente corregerà, si trovasse scritta in qualche processo, si dovranno cassare dalli processi originali tutte quelle circostanze, che riguardano la detta rivelazione di confessioni sacramentali: SCSO, Instr. *La Santità*, 23-III-1726»: U. GIRALDI, *Expositio Iuris Pontifici iuxta recentiorum Ecclesiae disciplinam in duas partes distribuita*, Romae 1830, pars prima, II, 642-643.

77. A la hora de estudiar la sentencia veremos los efectos que tiene, en relación con la imposición de la pena, la espontánea confesión del sacerdote.

78. «Verum post Codicem aliquae normae proceduræ Sancti Officii normis a Codice inductis uniformatae sunt et Codicem sunt sequutae, ut ex Instructione a. 1922, quae tamen publici iuris facta nondum est, patet. Ita, e. g., licet in Instructione a. 1866, n. 11, dicatur reus, dum fiunt constituta, interrogandus esse iureiurando veritatis dicendae adstrictus, nunc tale iusirandum eidem reo deferri prohibetur ex c. 1744»: M. CONTE A CORONATA, *Institutiones...*, IV, n. 2116, 591. Cfr. H. LI-NENBERGER, *The false denunciation...*, 103, nota 135.

b) *Pruebas*

Nada decía la QSP sobre búsqueda de nuevas pruebas, tras el interrogatorio del sacerdote inculpado. No obstante, el Ordinario o el juez delegado debían practicar las que estimasen oportunas a la vista de los nuevos elementos que surgieran del interrogatorio del sacerdote, o porque las solicitase éste último.

c) *Derecho de defensa*

En la QSP aparecía mencionado de manera indirecta y genérica, al decir «reus in iudicium adducitur, et coram iudice cum interventu ecclesiastici viri, qui notarii partes agat super singulis cuiusque denunciationis et examinis adiunctis, iuramento dicendae veritatis obstrictus respondere debet»⁷⁹. Algunos autores mencionaban este derecho, aunque no especificaban la posibilidad de si podía estar ayudado por un abogado defensor⁸⁰.

La doctrina no daba noticias de que en la Instr. de 1922 se hubiese incluido una norma donde se mencione explícitamente el derecho que tiene el sacerdote inculpado de utilizar un abogado defensor, perito en la materia. El CIC 17, en su c. 1655, § 1 prescribía taxativamente que «en el juicio criminal el reo deberá tener siempre un abogado, elegido por sí o dado por el juez». Dada la imperatividad de esta norma nos parece que era un derecho del sacerdote, y que debía existir siempre un abogado elegido por el interesado o nombrado *ex officio* por el juez en estas causas judiciales.

Con la reforma de la SCSO realizada por Pablo VI con el IS y la REU, se señalaba que una de las competencias de la CDF era la de «cuidar de proteger la dignidad del sacramento de la penitencia, según sus propias normas, enmendadas y aprobadas, las cuales se darán a conocer a los ordinarios locales, concediendo al reo la facultad de defenderse o elegir abogado de entre aquellos que han sido aprobados ante la Congregación»⁸¹; en lo que se refiere a esta materia, se debía dar al sacerdote el derecho a la defensa y a ayudarse de un abogado defensor.

La referencia que realizaban el IS y la REU a unas normas especiales en relación al sacramento de la penitencia, coinciden con las noticias que da la doctrina sobre la promulgación, en 1962, de una nueva instrucción, que es la que pa-

79. Cfr. QSP, n. 11: ASS 3 (1867-1868) 503.

80. «Reo facultate facta se defendendi; praesenti etiam procuratore fiscali»: F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis...*, II, n. 457, 469. «Peracta rei interrogatione et concessa ei defensione, ad poenas, si casus fuerat»: M. CONTE A CORONATA, *Institutiones...*, IV, n. 2116, 591.

81. Cfr. n. 8 IS y art. 36 REU.

rece estar actualmente vigente⁸². En la doctrina no hay ninguna referencia a qué cambios han podido producirse en esta instrucción. Nos parece que dada la cercanía en el tiempo a la reforma efectuada por Pablo VI, quizás el motivo principal sería el asegurar este derecho de defensa del inculpado.

El derecho de defensa en el proceso diocesano

Cuando el proceso se desarrollaba ante el Ordinario y según las normas del CIC 17, Muniz informaba de que la praxis era que «el Provisor (...) requerirá al presunto reo para que nombre abogado, o se lo nombrará él, a sacerdote grave, perito en derecho y de mucha conciencia»⁸³: con ello se cumplía con la indicación del c. 1655, § 1 CIC 17, tan importante para el derecho de defensa del reo.

El derecho de defensa en la Congregación

No tenemos noticias de cómo se actuaba en la Congregación cuando ella procedía internamente en la persecución de estos delitos. Sin embargo, nos parece que se puede dar una respuesta a este tema teniendo en cuenta los datos que ofrece la doctrina sobre la composición de la Congregación, para el estudio de las causas criminales.

Según esos datos, en las causas criminales intervenían: un Comisario (como juez instructor) y dos ayudantes (llamados *Socii*), promotor de justicia, abogado de los reos, notario, *summista* (que redactaba el proceso)⁸⁴. El tribunal propiamente dicho que dictaba las sentencias era la Congregación de Cardenales. Parece que esta composición del tribunal es anterior a la Const. Ap. *Sapienti Consilio* y permanece aún con posterioridad a la promulgación del CIC 17.

En los años de la reforma de la Congregación llevada a cabo por Pablo VI, según el *Anuario Pontificio*, la estructura de la CDF era:

— en 1965: Prefecto, el Romano Pontífice. Colegio de Cardenales, con el Cardenal Secretario. Seguía el Asesor y el Comisario. Posteriormente venían los Consultores, dentro de los cuales se incluían al Primer compañero del Comisario y al Promotor de Justicia. El Promotor de Justicia Adjunto, abogado de los

82. Cfr. nota 29.

83. Cfr. T. MUNIZ, *Procedimientos...*, III, 573.

84. Cfr. F. DELLA ROCCA, *Instituciones de Derecho Procesal Canónico...*, 141; M. LEGA, *Praelectiones...*, IV, n. 528; B. OJETTI, *De Romana Curia. Commentarium in constitutionem Apostolicam Sapienti Consilio seu de Curiae plana reformatione*, Romae 1910, 50-51; F.M. CAPPELLO, *De Curia Romana iuxta reformationem a Pio X sapientissime inductam*, Romae 1911, 67; J.B. FERRERES, *La Curia Romana según la novísima disciplina decretada por Pio X*, Madrid 1911, nn. 300-306; F. ROBERTI, *De Processibus...*, I, n. 161.

reos, dos Defensores del Vínculo, dos sumistas, y el Segundo compañero del Comisario⁸⁵;

— en 1966: desaparecen los oficios de Comisario y de Primer y Segundo compañeros, así como el de Abogado de los reos. Aparece un colegio de Abogados⁸⁶;

— en el año 1967: aparece un Colegio de Jueces, con nueve jueces integrantes. El resto de la estructura de la Congregación no sufre variaciones⁸⁷;

— todo permanece igual, hasta 1970, donde no aparece el Colegio de Jueces ni el Colegio de Abogados⁸⁸.

Es decir, la defensa de los sacerdotes inculpados que eran directamente enjuiciados en la CDF, venía ejercida por:

a) un abogado *ex officio* que existía en la propia Congregación, hasta la reforma de la SCSO por Pablo VI;

b) tras esta reforma, el abogado se podía elegir entre aquellos aprobados por la propia Congregación.

d) *Obligación estricta de guardar secreto*

Estas causas ya sean llevadas por derecho propio del Obispo o por delegación Apostólica, debían ser tratadas de un modo cuidadoso y secretísimo, y una vez acabadas y ejecutadas la sentencia, se debía imponer silencio perpetuo a todos los que hubieren intervenido⁸⁹.

Quedaban obligados a guardar el más absoluto secreto en estas causas de sollicitación el Ordinario, sus delegados, el notario, el denunciante, los testigos de *vita et moribus*, todos los que de alguna manera habían intervenido en el proceso, y aun el mismo denunciado en lo que pudiera afectar a otros. Este secreto se llamaba del Santo Oficio, y obligaba no sólo por derecho natural, sino también por ley positiva o por obediencia al Santo Oficio⁹⁰.

El Ordinario quedaba obligado al secreto aunque no prestase juramento⁹¹; el delegado y el notario debían prestar juramento de guardar secreto y de cumplir fielmente su misión⁹²; al denunciante se le exigía juramento de decir la ver-

85. Cfr. *Anuario Pontificio*, 1965, 909-911.

86. Cfr. *Ibidem*, 1966, 913-915.

87. Cfr. *Ibidem*, 1967, 935-937.

88. Cfr. *Ibidem*, 1970, 951-953.

89. Cfr. QSP, n. 14: ASS 3 (1867-1868) 504.

90. Cfr. M. LEGA, *Praelectiones...*, IV, n. 531; F. ROBERTI, *De Processibus...*, n. 161, III.

91. Cfr. M. LEGA, *Praelectiones...*, IV, n. 531, 538.

92. «Ego N. N., ad hoc a Rdm. N. specialiter constitutus iudex delegatus (vel notarius), iuro Dei Nomine invocato et tactis Sanctis Dei Evangeliiis me fideliter adimpletorum munus mihi commissum in hac causa de sollicitatione in confessione, et secretum Scti. Officii strictissime servatu-

dad al empezar su declaración, y después de prestarla se le pedía juramento de guardar secreto sobre lo declarado⁹³; práctica que se observaba con respecto a los testigos de *bonum nomen*⁹⁴. Estos juramentos se hacían, aun por los mismos sacerdotes, con las manos puestas sobre los Santos Evangelios, según fue práctica constante del Santo Oficio⁹⁵. Para fortalecer más el secreto, podía el Ordinario conminar con la excomunión a los infractores, particularmente a los testigos y al reo⁹⁶. En cuanto a la extensión, este secreto comprende a todo lo que se diga y se trate en estos procesos, aunque estrictamente por derecho no pertenezca a la CDF⁹⁷.

En la Instr. de 1922 se seguía urgiendo a realizar los juramentos de esta manera⁹⁸.

Actualmente sigue existiendo la máxima reserva en el tratamiento de esta materia. Las normas vigentes están contenidas en la Instr. *Secreta continere*⁹⁹ sobre el secreto que se debe guardar en todo lo referente a esta materia. En ella se prescribe que el secreto pontificio comprende «las denuncias extrajudiciales que se reciban sobre delitos cometidos contra la fe y costumbres, y contra el sacramento de la penitencia, así como el proceso y decisión sobre estas mismas denuncias, quedando siempre a salvo el derecho del acusado a conocer la denuncia, si ello es necesario para la propia defensa. El nombre del denunciante sólo podrá manifestarse cuando a la autoridad parezca oportuno, con el fin de que el denunciante y el denunciado tengan un careo»¹⁰⁰. Están obligados a guardar se-

rum. Sic me Deus adiuvet et haec Scta. Eius Evangelia. –N. N. iudex delegatus (vel notarius) iuro ut supra»: T. MUNIZ, *Procedimientos...*, III, n. 669, 574. Como indicaba Muniz, esta fórmula juratoria se redactaba al pie de la delegación que se había recibido del Obispo, y a continuación se escribía el acta de la denuncia: *Ibidem*.

93. Cfr. QSP, *Modus*: ASS 3 (1867-1868) 505.

94. Cfr. ISR, § VI: ASS 30 (1897-1898) 250.

95. Cfr. QSP, n. 14: ASS 3 (1867-1868) 505.

96. Cfr. ISR, § VIII: ASS 30 (1897-1898) 250.

97. Cfr. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones...*, IV, n. 2116, 590.

98. «Not only is the penitent placed under oath to tell the truth and to keep secrecy, but the officials too must take the oath to keep the report secret. For the taking of this oath the Instruction of 1866 demanded that even those priests who made denunciations of the crime of solicitation had to touch the gospels when taking this oath. Though canon 1622 accords to a priest the privilege to touch his breast when he takes an oath, the Instruction of the Holy Office issued on June 8-9, 1922, demands that the norm of 1866 Instruction be retained»: H. LINENBERGER, *The false denunciation...*, 79.

99. Cfr. SECRETARÍA DE ESTADO, Instr. *Secreta continere*, 4.II.1974: AAS 66 (1974) 89-92. También, art. 38 § 2 RGCR.

100. Cfr. *Ibidem*, art. I, 4): AAS 66 (1974) 90. La doctrina canónica no es muy partidaria de estos careos: cfr. L. DEL AMO, *Comentario al c. 1560*: Instituto Martín de Azpilcueta (ed.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y anotada*, 5.^a ed., Pamplona 1992; F. GIL DE LAS HERAS, *Comentario al c. 1560*: Com. Exe., IV/2, 1356-1358; J.M. SERRANO RUIZ, *Comentario al c. 1560* P.V. PINTO (Ed.), *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985, 815-816.

creto pontificio «los Cardenales, Obispos (...) que tratan cuestiones sujetas al secreto pontificio y todos aquellos a quienes se impone el secreto pontificio en causas especiales»¹⁰¹.

2. *El proceso ante el tribunal diocesano, según las normas del CIC 17*

En esta parte del proceso, cuando se realizaba ante el Ordinario, y en los supuestos en que no procedía por delegación de la SCSO, se debía atener a lo que prescribía el CIC 17 para el juicio criminal ordinario. En todo caso, debía actuar de manera muy prudente, al tratarse de un asunto muy delicado¹⁰².

— *Reprensión del sacerdote inculgado*. Tras la fase de la investigación previa, si el delito aparecía cierto o con argumentos probables y suficientes para formular la acusación, se llamaba al reo, y se le sometía a examen, cuidando mucho de no darle a conocer los nombres del denunciante y de los testigos¹⁰³. Si el reo confesaba ser autor del delito, se le imponían aquellas penitencias y remedios penales oportunos para evitar las posibles futuras ocasiones y recaídas.

Cuando el reo negase que había cometido el delito, y a pesar de ello el Ordinario advirtiese que había en el sumario argumentos serios, debía mandar formular la acusación fiscal; más si no había argumentos probables, los debía sopesar con toda prudencia para ver si sería más oportuno detenerse aquí o seguir adelante; si lo primero, para evitar escándalos, podía tomar contra el supuesto reo las medidas de gobierno previstas en el Código, siempre que los argumentos fuesen probables¹⁰⁴; si lo segundo, debía llamar al fiscal para que él formulase la acusación¹⁰⁵.

— *Acusación fiscal y nombramiento del defensor*. Aunque el fiscal no estaba obligado a hacer un nuevo juramento de guardar secreto y de cumplir bien su oficio, lo solía repetir ante el Ordinario al recibir lo actuado para formular la acusación. El Provisor que no necesitaba mandato especial para conocer de la causa si ante él se formula la acusación, debía requerir al presunto reo para que nombrase abogado, o se lo nombraba él, a sacerdote grave, perito en derecho y de mucha ciencia¹⁰⁶.

— *Pruebas*. Las fundamentales eran las del sumario, pero la sagacidad del fiscal y la del defensor se debían ejercitar en traer al proceso otros indicios adversos o favorables¹⁰⁷.

101. Cfr. *Ibidem*, art. II: AAS 66 (1974) 91.

102. Cfr. M. LEGA, *Praelectiones...*, IV, 564.

103. Cfr. T. MUNIZ, *Procedimientos...*, III, 573.

104. Cfr. c. 2222 § 2 CIC 17.

105. Cfr. T. MUNIZ, *Procedimientos...*, III, 573.

106. Cfr. *Ibidem*.

107. Cfr. *Ibidem*.

3. *Proceso ante el tribunal de la Congregación*

Dar noticias del proceso en el seno de la SCSO es una empresa ardua y difícil, ya que el modo habitual de proceder por parte de la Congregación es de máxima reserva: los negocios tratados por la Congregación han sido llevados siempre con gran secreto por la naturaleza de la materia. Históricamente todas las personas que han asistido a los procesos de herejía y sospechoso de herejía, los de solicitud, etc., han debido guardar el secreto del Santo Oficio, ya sea porque al ser delegados del Santo Oficio les obligaba a ello, ya sea porque se les imponía bajo juramento. Por este motivo es difícil señalar el procedimiento que sigue como tribunal¹⁰⁸.

Las noticias que nos da la doctrina son parciales, y en parte se basan en las instrucciones de la SCSO anteriormente estudiadas, y en la comparación con el proceso criminal ordinario. Así, Lega nos informaba de la fase inquisitiva: raramente la Congregación iniciaba el proceso *ex officio*, sino que solía actuar previa denuncia de los Ordinarios del lugar, de los Inquisidores, de otros Prelados, o de fieles. Al recibir las denuncias actuaba de modo cauto, ya que en la primera y segunda denuncia solía responder al Ordinario del acusado «observetur», y solamente con la tercera denuncia se procedía a la investigación, y cuando el crimen apareciera suficientemente probado llamaba al acusado al examen o a comparecer. Nada había que objetar que se procediera con la primera denuncia, si con ésta aparecían graves pruebas o si se preveía que esperar a una ulterior denuncia dejaría impune el delito¹⁰⁹.

Una vez que se haya decidido procesar al sacerdote, según Roberti, se cita al acusado, que una vez en juicio debía contestar. Al sacerdote se le podía suspender del ministerio sagrado como medida cautelar¹¹⁰. Se enseñaban al acusado las declaraciones de los testigos, no sus nombres ni el de los acusadores. El acusado podía oponer excepciones y manifestar su defensa. Oído el voto del promotor de justicia y la defensa del acusado, se dictaba sentencia. Si el crimen no fue grave o no se probó plenamente, se le imponían remedios penales, monición, precepto, corrección, vigilancia. No se daba apelación a la sentencia, porque el Santo Oficio era un tribunal supremo; solamente, en el supuesto que aparecieran nuevos argumentos se podía pedir un nuevo examen de la causa¹¹¹.

Por otra parte, como nos indicaba Lega, el Comisario del Tribunal del Santo Oficio era *quasi* juez instructor, ayudado por dos hermanos de la misma orden llamados Socios (compañeros), y estaba presente en la realización de los juicios

108. Cfr. B. OJETTI, *De Romana Curia...*, n. 35.

109. Cfr. M. LEGA, *Praelectiones...*, IV, n. 534, 543-544.

110. Cfr. *Ibidem*, n. 534, 545. Cfr. también c. 1956 CIC 17.

111. Cfr. F. ROBERTI, *De Processibus...*, I, n. 163, 402.

que se realizaban en la SCSO. Además, debía estar presente el Oficial Fiscal, que cuando el proceso se debía instruir por el Ordinario del lugar, era quien debía comunicarle las Instrucciones que debía tener en cuenta para llevarlo a cabo. Al abogado de los acusados le correspondía defender *ex officio* a los acusados que no podían o no querían elegir abogado defensor¹¹².

En el intervalo entre la supresión del oficio de Comisario del Santo Oficio¹¹³ y la entrada en vigor de la REU fue constituido un específico colegio de jueces, cuya función era de naturaleza instructoria y consultiva, análoga a la del Comisario, pues la potestad judicial correspondía a los miembros de la Congregación¹¹⁴.

III. SENTENCIA

En estos delitos que son tan difíciles de probar, a la hora de dictar sentencia se tenían en cuenta una serie de circunstancias que el juez debía sopesar. Como indicaba Conte a Coronata, el juez tenía que atender principalmente al valor que se debía dar a la denuncia o denuncias, más que a su número. No parecía suficiente motivo para corregir (imponer una penitencia o una pena) a un sacerdote, el que se hubieran recibido contra él tres o más denuncias de solici-tación en confesión, si del contenido de las diligencias que se habían hecho, se desprendía que había actuado de buena fe y el sacerdote era considerado de buena fama¹¹⁵.

La QSP indicaba que cuando el crimen de solici-tación se consideraba probado, el Obispo, no su delegado, debía dictar sentencia¹¹⁶. Con la Instr. de 1922 se permitió a un juez delegado dictar la sentencia en estos casos¹¹⁷.

112. Cfr. M. LEGA, *Praelectiones...*, IV, n. 528, 535.

113. Cfr. PABLO VI, *Lettera al Maestro Generale dell'Ordine dei Predicatori*, 26.III.1966: AAS 58 (1966) 292-294.

114. «Prima del m.p. *Integrae servandae*, presso la Congregazione per la dottrina della fede, l'istruttoria era affidata ad un "commissario" designato stabilmente, corrispondendo la potestà giudiziaria alla Congregazione stessa. Nell'intervallo fra la soppressione dei *Commissarii Sancti Officii* e l'entrata in vigore della cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* fu costituito uno specifico "collegio dei giudici", anche se la potestà giudiziaria corrispondeva ai membri della Congregazione, avendo l'opera di detto "collegio" natura meramente istruttoria e consultiva, analoga a quella del "commissario", ciò si desume dalle "note storiche" dell'*Annuario Pontificio*»: J. LLOBELL, *I delitti riservati...*, 262.

115. Cfr. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones...*, IV, n. 2116, 592.

116. Cfr. QSP, n. 12: ASS 3 (1867-1868) 503.

117. «In citata Instructione a. 1866, dicitur n. 12, *Episcopum ipsum, non alium ab eo delegatum sententiam proferre debere. At hodie permittitur delegatio*»: M. CONTE A CORONATA, *Institutiones...*, IV, n. 2116, 590, nota 3. También H. LINENBERGER, *The false denunciation...*, 103, nota 135.

1. *Espontánea confesión*

Podía ocurrir que el reo hiciera una espontánea confesión del delito cometido. A tenor de lo que decían las Instrucciones de la SCSO, la espontánea confesión tenía una serie de efectos beneficiosos para con el reo sacerdote. En efecto, si la espontánea confesión la realizaba antes de que fuese denunciado, el Ordinario o su delegado le debían imponer una penitencia saludable, el precepto o consejo de abstenerse de recibir la confesión sacramental de las personas solicitadas, debía realizar la abjuración de la posible herejía que hubiese cometido, y no se les imponían las otras penas, aunque después se reciban las denuncias. Si ya se había recibido la denuncia, el Ordinario o su delegado debía recibir la espontánea confesión del sacerdote, pero si de la denuncia se desprendía que el reo confeso no había dicho íntegramente la verdad, no gozaban del beneficio de impunidad, sino que el Ordinario debía castigarlo según su prudencia¹¹⁸.

Indicaba Muniz que «como estas denuncias, todas o la mayor parte, suelen ir hoy a la Sagrada Congregación del Santo Oficio, importa mucho al reo pedir al Ordinario que transmita su confesión espontánea a dicha Sda. Congregación para que allí conste y produzca sus efectos»¹¹⁹.

2. *Casos especiales*

No raramente, en estos procesos se podían presentar graves dificultades a la hora de poner en práctica este procedimiento, o para dictar sentencia sobre algún caso. En éstos, los Ordinarios podían y debían hacer las consultas que pensasen convenientes a la SCSO, transmitiendo las actas del proceso a la Congregación para recibir las instrucciones oportunas de cómo debe comportarse: practicar nuevas pruebas, archivar la causa, dictar sentencia, etc.¹²⁰

3. *Notificación de la sentencia dada por la CDF*

En los casos en que la SCSO dictase sentencia, solía notificarla al sacerdote a través del Ordinario del lugar, al cual se le comunicaba la forma de actuar. Lega nos transmitía la manera de proceder en estos casos: constitución del tribunal; notificación de la sentencia; abjuración y absolución¹²¹.

118. Cfr. QSP, n. 13: ASS 3 (1867-1868) 503-504.

119. Cfr. T. MUNIZ, *Procedimientos...*, III, 569.

120. Cfr. QSP, n. 14: ASS 3 (1867-1868) 504.

121. Cfr. M. LEGA, *Praelectiones...*, IV, n. 543, 561.

Constitución del tribunal: el Obispo o Vicario Capitular designaba al notario sacerdote, y recibía de él el juramento de guardar secreto y de cumplir bien su oficio; designaba también a otros dos como testigos, personas graves por su edad y prudencia, que prestaban el juramento de guardar secreto. El Obispo o el Vicario Capitular podía delegar en otro esta misión, el cual debía proceder siempre consignando su carácter de delegado especial y después de prestar el juramento en términos semejantes a los del notario¹²².

Notificación de la sentencia: presente el reo, el juez recibía el juramento del inculpado de decir la verdad, y después le hacía saber que la SCSO había dictado sentencia contra él, que le leía y explicaba en lo que fuera necesario. Preguntado el reo si estaba dispuesto a obedecer, y recibida su respuesta afirmativa, se pasaba a los demás actos¹²³.

Imposición de penitencia: unas veces el Santo Oficio señalaba la penitencia que debía imponerse, otras veces daba normas para imponerla¹²⁴.

Abjuración: el crimen de solicitación llevaba consigo sospecha de herejía, y al que lo había confesado en juicio¹²⁵, se le pedía la abjuración¹²⁶ para poder absolverle de las censuras en que hubiera podido incurrir¹²⁷.

Absolución: se daba la absolución de la censura, siguiendo la fórmula del Ritual Romano, Tit. III, cap. 3. Recitada y firmada la fórmula de la abjuración, el reo arrodillado recitaba el *Miserere* o el *De profundis*. Posteriormente, el juez le daba la absolución¹²⁸.

122. Cfr. *Ibidem*, 561.

123. Cfr. *Ibidem*, 561.

124. Cfr. *Ibidem*, 561.

125. Cfr. QSP, n. 12: ASS 3 (1867-1868) 503.

126. Lega nos transmite la fórmula de abjuración que se utilizaba en la SCSO: «Io D. figlio del fu Giuseppe, nativo di... di anni... sacerdote professò nell'istituto... Rettore nella Chiesa... costituito personalmente ed inginocchiato innanzi a Dio, in presenza di S. Ecc. Mons. ... avendo sotto gli occhi i sacrosanti Evangelii, che tocco colle mani, e sapendo che niuno può salvarsi fuori di quella fede, che tiene, crede, predica, professa ed insegna la S. Chiesa Cattolica, contro la quale mi dolgo di aver dato sospetto fortissimo, perchè commisi imprudenze con donne nel confessarle; dolente e pentito del mal fatto condanno ogni errore ed eresia, certo della falsità de essi e delle verità della s. Chiesa cattolica; e con cuor sincero e fede non finta, abiuro, detesto e maledico tutti gli errori e tutte le eresie e sette contrarie alla detta Santa, Cattolica, Apostolica Chiesa. Accetto anche e prometto di adempire interamente tutte le penitenze, che mi sono e mi saranno dal S. Ufficio imposte; e contravvenendo io ad alcuna di dette mie promesse e giuramenti, il che Dio non voglia, mi sottometto a tutte le penne e i castighi, che sono dai ss. Canoni, e da altre Costituzioni Generali o Particolari contro simili delinquenze, imposte o promulgate. Così Dio mi aiuti e questi suoi ss. Evangelii. Io suddetto ho abiurato e promesso e mi sono obbligato, come sopra, e in fede del vero ho di propria mano firmata la presente cedola di mia abiurazione, che qui di parola in parola ho recitato. Di Torino, in questo di... del mese di... dell'anno 19... N. N.»: *Ibidem*, 562.

127. «Abiuratio imponitur tantum quando reus es confessus et prout est confessus; ei et quantum. Quare in descriptione corporis delicti, quod inserendum in formula abiurationis est, unice attenditur ad ea, circa quae confessus est reus»: *Ibidem*, 561-562.

128. Cfr. *Ibidem*, 563.

Acta: el notario levantaba acta de lo practicado, que firmaban el reo, el juez y los dos testigos, después de que el primero hubiera prestado juramento de guardar secreto *quoad alios*, y se remitía a la SCSO que había dado la sentencia, conservándose copia auténtica de ella en el archivo secreto de la Curia diocesana¹²⁹.

4. *Apelación de la sentencia*

La sentencia podía ser dada tanto por el Ordinario como por la SCSO. Cuando la sentencia fue dictada por el Ordinario, el reo podía apelar a la SCSO¹³⁰. Cuando la sentencia fue pronunciada por la propia Congregación, al constituir ésta última instancia, parece que no había posibilidad de apelar la sentencia dada por ella, y sólo cabía pedir un nuevo examen de la causa al presentar nuevos argumentos de peso¹³¹.

En relación a si la apelación a la Congregación de una sentencia pronunciada por un Obispo tuviera o no efecto suspensivo, la doctrina no daba una respuesta unánime¹³².

129. Cfr. *Ibidem*, 563. Lega cita un modelo de acta: «Die etc. Vigore epistolae Supremae Universalis Inquisitionis, diei etc. coram R. P. D. Archiepiscopo Taurinensi sistensi in... (luogo) atque in mei praesentia, adstantibus et praesentibus, uti testibus, D. D. (persone dei testi) rogatis idoneis, mihi notario cognitis, atque una mecum coram praeaudato Archiepiscopo per corporalem tactum S. Evangelii respective iuratis de secreto servando et munere fideliter obeundo, vocatus personaliter comparuit N. N. filius qd... presbyter, aetate annorum... degens... qui menitus fuit per Dnum iudicem vocatum eum fuisse propter causam contra ipsum in s. Officio vertentem, et cui proinde delatum fuit, per eundem Dnum iudicem, iuramentum de veritate dicenda, quod praestitit tactis Sanctis Dei Evangeliiis. Tunc idem Dnus Iudex inquisitum monuit Emos ac Rmos Dnos Cardinales Generales Inquisitores sententiam contra ipsum tulisse in causa sollicitationis ad turpia, per abusum Sacramenti Poenitentiae, atque eidem clare et distincte legit dictam epistolam Supremae et Universalis Inquisitionis, singula explicando. Quibus bene auditis et intellectis, fuit inquisitus per Dnum Iudicem interrogatus utrum parere intendat. Habitaque responsione affirmativa, fuerunt inquisitio, per Dnum Iudicem impositae poenitentiae salutares in sententia contentae. Tunc vero inquisitus genuflexus coram eodem Dno atque tangens Sacrosancta Dei Evangelia ante se posita abiuravit haereses et errores, prout in adnexa schedula abiurationis suae; qua abiuratione peracta, adhuc genuflexus fuit absolutus in forma Ecclesiae consueta a sententia excommunicationis et S. M. E. reconciliatus, adhibitis orationibus et caeremoniis solitis et consuetis. Quibus habitis, dimissus fuit, iuratus ad tactum s. Evangelii de secreto servando quoad alios, atque praevia, in praemissorum confirmationem, ipsius, testium, meique subscriptione. N. N. (subscriptio rei) N. N. (subscriptio Iudicis) N. N. Testis N. N. Testis. Acta sunt per me notarium assumptum N. N.»: *Ibidem*, 563-564.

130. Cfr. F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis...*, II, n. 458, 469.

131. Cfr. F. ROBERTI, *De Processibus...*, I, n. 163, 402.

132. «Utrum sit appellatio proprie dicta atque ideo es praescripto can. 2287 in suspensivo necne, controversitur. Quidam affirmant; plures negant»: F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis...*, II, n. 458, 469.

Aunque la doctrina no se planteaba la cuestión, contra una sentencia dada en estos procesos, teóricamente hablando, cabrían los recursos extraordinarios de la *querela nullitatis* (c. 1892 CIC 17) y de la *restitutio in integrum* (c. 1905 CIC 17). Decimos teóricamente hablando porque tal y como se desarrollaba el proceso, con unas normas procesales tan rígidas y con una supervisión de la SCSO desde que se tenían las primeras *notitia criminis*, parecía muy difícil que se pudiera dar el recurso extraordinario de la *querela nullitatis*. Sin embargo, no se podía excluir el supuesto de denuncias falsas, bien urdidas, que llevasen a la condena de un sacerdote inocente y que, posteriormente a la sentencia dada, se demostrase la falsedad de las pruebas presentadas contra él (declaraciones de testigos, etc.).

IV. CONSIDERACIONES GENERALES A LA LUZ DE LA ACTUAL NORMATIVA

Hasta ahora, con las noticias parciales que nos transmite la doctrina, se ha tratado de exponer de forma ordenada el procedimiento al que se debían atener los Ordinarios, así como algunos problemas que la doctrina señalaba.

Tras la promulgación del actual Código del 83, así como de la nueva regulación de la Curia Romana con la PB nos parece que estas normas se deben modificar, amoldándose a las prescripciones del CIC para los juicios criminales.

Una de las notas que emergen tras la promulgación de la PB es que en la CDF no sólo procede como un órgano administrativo, sino que en su seno existe un tribunal, cuya competencia viene definida por la materia, y que, para en estos supuestos, procede a tenor del derecho, tanto común como propio, cuando sea necesario, no estando estas leyes propias publicadas. La doctrina nos indica que estas leyes propias podrían promulgarse sólo para los propios Ordinarios, e imponerles su cumplimiento obligado en cuanto los tribunales diocesanos deban enjuiciar estos delitos.

Esta promulgación restringida de la ley procesal podría interpretarse como una limitación del derecho de defensa del inculpado, ya que no conoce exactamente el procedimiento que se ha seguido hasta el momento en que es acusado formalmente. La justificación a esta promulgación restringida a los Ordinarios de la ley procesal se encontraría, según la doctrina, en armonizar la protección del bien público con el derecho de quien podría ser acusado injustamente de delitos, en los que le resultaría muy difícil realizar la propia defensa al encontrarse en el ámbito del sigilo sacramental¹³³. De esta forma, se protegería a los sacerdotes de acusaciones falsas bien urdidas contra ellos, además de tutelar su derecho a la buena fama y a la intimidad¹³⁴.

133. Cfr. J. LLOBELL, *I delitti riservati...*, 250.

134. «L'eventuale denunciante calunnioso, conoscendo la norma e sapendo che l'accusato non verrà a conoscenza della sua identità, potrebbe ordire la calunnia in modo tale d'ingannare il tribu-

Ante estas afirmaciones pensamos que convendría tener en cuenta que, cuando una persona acusa falsamente de este delito, por las mismas características de su comisión, sabe que el sacerdote acusado tiene serias dificultades en su defensa, ya que entra en juego la obligación de guardar secreto del sigilo sacramental. Además, hasta las normas de 1922 fue conocida, y comentada por la doctrina, la forma de proceder por parte de la Congregación; posteriormente a esta fecha, aunque la doctrina no ha transmitido las normas concretas de la forma de proceder, si ha señalado que ésta sigue siendo similar a la praxis tradicional de la Congregación, por lo que una persona que deseara acusar falsamente de este delito a un sacerdote, conseguiría su objetivo, sin necesidad de conocer en detalle la forma de proceder. Por esto nos parece que la publicidad de la norma procesal va más en beneficio de los inculpados que en su perjuicio.

Como hemos visto, el legislador eligió un procedimiento muy formal para conseguir un doble objetivo: de una parte, evitar que se proceda contra un sacerdote inocente, de otra, que los delitos de solicitudación sean perseguidos. Las normas de finales del siglo XIX imponían la no prosecución del proceso, si en alguno de sus requisitos (formulación de la denuncia, forma de interrogar a los testigos, etc., que estaban muy detallados en unos módulos) no se desarrollaba el proceso como venía indicado en las Instrucciones de la SCSO¹³⁵. Sin embargo, las normas vigentes no son tan exigentes para prohibir la prosecución de la causa cuando alguna de las formalidades que están prescritas no fuese perfectamente cumplida¹³⁶.

Por último, nos podemos preguntar si las normas propias de la CDF se aplican tanto en el ámbito latino como en el oriental. La Instr. de la SCSO de 8-9 de junio de 1922 indicaba explícitamente la unidad procesal inter-ritual para juzgar el delito de solicitudación¹³⁷.

nale. Il problema è grave e antico. Anche dopo il Vaticano II è stata prevista questa promulgazione ristretta della legge processuale, quantunque le stesse norme di Paolo VI volessero offrire un sistema di trasparenza nella procedura della Congregazione. Infatti, l'esistenza di una norma "segreta" sul processo penale rischia di ferire la sensibilità ecclesiale e giuridica, dando l'impressione di violare il diritto di difesa dell'accusato. La giustificazione della segretezza della norma decadrebbe se si considera che quanto si desidererebbe proteggere con il segreto (che l'accusato non conoscerà l'identità dei denunciatori né dei testimoni) è noto a chi studia la dottrina posteriore al CIC 1917, la quale indica che le norme prescrivono questo modo d'istruire il processo»: *Ibidem*, 253-254.

135. Cfr. ISR, II-III: ASS 30 (1897-1898) 249. «The Instruction of June 8-9, 1922, demands that its norms be followed to the very finger tips, "...ut ad unguem servent et servare faciunt..." wrote Cardinal Merry del Val when he released it»: SCSO, Instr., 8-9 de junio de 1922: H. LINENBERGER, *The false denunciation...*, 84, nota 44.

136. Cfr. J. LLOBELL, *I delitti riservati...*, 261.

137. «Moreover, the June 8-9, 1922 Pagella of the Holy Office on its flyleaf states in bold type that the Instruction is also to be sent to Orientals (ad omnes... Ordinarios "Etiam Ritus Orientalis")»: H. LINENBERGER, *The false denunciation...*, 177, nota 8. Cfr. I. ORTEGA UHINK, *De delicto sollicitationis: evolutio historica, documenta, commentarius*, Washington 1954, 202, nota 39.

En los sucesivos apartados vamos a exponer algunas de las dificultades con las que se pueden enfrentar las normas propias con las nuevas normas generales: Códigos latino y oriental y regulación de la Curia Romana. Nos referiremos a los dos ámbitos donde se pueden desarrollar estos procesos: el diocesano y el de la Curia Romana.

1. *Desarrollo de los procesos criminales ante los tribunales diocesanos*

Para la doctrina que comentaba las normas de la Congregación y del CIC 17¹³⁸, los Ordinarios podían actuar según el proceso ordinario, pero teniendo en cuenta las normas procesales dictadas para estos casos por la actual CDF.

Estas instrucciones indicaban que los Ordinarios estaban obligados a transmitir a la Congregación cuanto antes toda noticia de comisión del delito para comprobar si hay otras denuncias o indicios. Esto facilitaba a la SCSO el poder comprobar si el Ordinario tenía las normas procesales propias para actuar en estas causas, y en casos especiales, a la SCSO le servía conocer las noticias de la comisión de estos delitos para avocarse a sí el el juicio de estas causas¹³⁹. Las futuras normas procesales que se puedan dar deberían especificar la necesidad —u oportunidad— de que los Ordinarios se dirigieran previamente a la CDF antes de proceder contra un sacerdote.

En los sucesivos epígrafes vamos a intentar dar una respuesta a algunos interrogantes con los que nos enfrentamos después de la publicación de los Códigos Latino y Oriental, así como de la PB.

a) *Tribunal unipersonal o colegiado*

Como hemos estudiado, las normas procesales especiales de la SCSO para el juicio de los delitos de sollicitación otorgaban la competencia al Obispo diocesano, que podía delegarla a un juez unipersonal, planteando el proceso de modo inquisitorio¹⁴⁰. Estas disposiciones contrastaban con lo dispuesto en el c. 1576 § 1, 2º CIC 17, donde se prescribía la obligatoriedad del conocimiento por un tribunal de cinco jueces las causas que versaban sobre delitos que llevaban consigo la pena de deposición y de degradación. Ello venía justificado por la dificultad de la instrucción y la reserva que se debía tener para tutelar del sigilo sacramental¹⁴¹.

138. Cfr. T. MUNIZ, *Procedimientos...*, III, 573-574.

139. Cfr. QSP, n. 16: ASS 3 (1867-1868) 504.

140. Cfr. QSP, nn. 6, 12, 14; NR; ISR, nn. 2-6. Para la SCSO, Instr. de 8-9 junio de 1922: H. LINENBERGER, *The false denunciation...*, 103, nota 135.

141. Cfr. J. LLOBELL, *I delitti riservati...*, 259.

Este contraste sigue siendo evidente con las disposiciones, el sistema acusatorio y la necesidad de un tribunal de al menos tres jueces para enjuiciar los delitos que pueden comportar la dimisión del estado clerical prescrita con los nuevos Códigos (c. 1425 § 1 CIC 83 y c. 1084 § 1 CCEO). Si todavía se mantiene la reserva a un tribunal unipersonal por la CDF, la doctrina salva esta dificultad atribuyendo a la Congregación la facultad que gozan las Conferencias episcopales de dispensar de la obligación de la colegialidad (c. 1425 § 4 CIC 83)¹⁴².

b) *Derecho de defensa*

Las normas particulares de la SCSO se movían en una tensión entre dos bienes públicos: la protección del sigilo sacramental, lo cual se conseguía no manifestando al sacerdote acusado la identidad de los denunciantes y de los testigos¹⁴³; y el derecho de defensa del acusado. Las normas procesales de la Congregación tendían a armonizar estos dos bienes públicos:

— de una parte, las normas propias prescribían el modo de comprobar la credibilidad de los denunciantes, de los acusadores y de los testigos, el derecho a apelar a la Congregación y la reserva del proceso para proteger la buena fama del sacerdote¹⁴⁴;

— de otra parte, al deberse garantizar en modo absoluto la tutela del sigilo sacramental, cuando el secreto instructorio afectase al abogado defensor¹⁴⁵, la defensa del acusado debería ser llevada por el mismo tribunal y el promotor de justicia, los cuales tienen una especial responsabilidad en estos procesos para averiguar la verdad. Así, las normas de la SCSO concedían al tribunal una amplia facultad de investigación para comprobar la verdad¹⁴⁶.

Al respecto queremos señalar que, como indicaban las normas propias, es posible que el sacerdote realice su confesión de haber cometido el delito de solicitudión. Por la propia característica de este acto del reo y de la peculiaridad del delito, el sacerdote a la hora de autoinculparse ante el Ordinario o el juez delegado debía dar las noticias necesarias y suficientes para que quedase claro el delito; entre ellas, debía decir, si lo conocía, el nombre de la persona solicitada, lugar donde realizó el delito, palabras con que el sacerdote incitó, etc. Todo ello,

142. *Ibidem*, 259.

143. Cfr. QSP, n. 11: ASS 3 (1867-1868) 503.

144. Cfr. J. LLOBELL, *I delitti riservati...*, 251.

145. «La segretezza degli atti per il patrono sarebbe sostenibile dall'identità che il m.p. *Integrae servandae* e la cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* sembrano stabilire fra i diritti del "reo" e quelli del suo patrono nelle cause penali presso la Congregazione. Tuttavia, un autorevole settore dottrinale non riteneva necessario detto segreto riguardo al difensore»: *Ibidem*, 251.

146. Cfr. QSP, nn. 10-11.

con absoluto respeto del sigilo de la confesión: así lo indicaba expresamente una Instr. de la SCSO de 23.III.1726, donde se daban instrucciones exactas de cómo proceder para salvaguardar el sigilo sacramental en las confesiones espontáneas o a la hora de interrogar a los sacerdotes en los procesos de solicitud¹⁴⁷.

Nos parece interesante resaltar cómo esta Instr. de 1726 establece que en las actas del proceso aparezca claramente el nombre de la persona solicitada: «dovranno semplicemente i sollecitanti deporre: confessandosi da me N. N. le disse etc. o feci etc. senza dir altro in ordine alla confessione de' penitenti».

¿Qué decir sobre la oportunidad o no de manifestar al denunciado la identidad de los denunciantes o testigos? Nos parece que, como directamente no afecta al sigilo sacramental, no hay razón que justifique su no manifestación al sacerdote denunciado. Por otra parte, parece que la experiencia de la Iglesia es que existen graves peligros que por inadvertencia (u otros motivos), de hecho, el sacerdote revele el sigilo sacramental¹⁴⁸.

Como indica una parte de la doctrina, nos parece que una solución a la tensión que debe existir en la protección de estas dos realidades la podemos encontrar en las normas del c. 1598 § 1 CIC 83¹⁴⁹ y c. 1281 § 1 CCEO que prescriben «en las causas que afectan al bien público, el juez, para evitar peligros gravísimos, puede decretar que algún acto no sea manifestado a nadie, teniendo cuidado de que siempre quede a salvo el derecho de defensa»¹⁵⁰; es decir, debe ser el juez o tribunal que, con su pericia, debe decidir qué actos del proceso deberán ser exhibidos al acusado y su defensor, intentando armonizar así la absoluta protección del sigilo de la confesión con la peculiaridad que el sigilo sacramental impone al derecho de defensa¹⁵¹. Por tanto, el juez o tribunal debería tomar esta decisión caso por caso a la vista de los elementos que ya se han recogido en el proceso.

147. Cfr. nota n. 75

148. Cfr. QSP, n. 11.

149. «In optatis est ut tamquam regula generalis habeatur quod quilibet processus sit publicus, nisi iudex propter rerum et personarum adiuncta aestimaverit, certis in casibus, secreto esse procedendum. Requiritur autem ut, in processu sive iudiciali sive administrativo, recurrenti vel reo manifestentur omnes rationes quae contra ipsum invocantur»: SINODO DE LOS OBISPOS 1967, Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant: *Communicationes*, 1 (1969), 83.

150. «Tuttavia, sembra evidente che l'eccezione predisposta dal can. 1598 fu prevista anche per le cause di cui ci occupiamo»: J. LLOBELL, *I delitti riservati...*, 251.

151. «Invero, la determinazione legale della segretezza assoluta dell'identità dei denunciati e dei testi non sarebbe giustificata neanche nei confronti dell'accusato, bastando la facoltà concessa al giudice dal can. 1598 di non manifestare a nessuno gli atti la cui pubblicità comporterebbe "gravissima pericula"; ed il pericolo reale di violazione del sigillo sacramentale giustificerebbe detta segretezza, quantunque affievolisca il diritto di difesa dell'accusato. Tuttavia, possono esserci casi in qui la manifestazione dell'identità dei denunciati e dei testi non comporti un reale pericolo di violazione del sigillo e, in tali fattispecie, non sarebbe giustificato l'affievolimento del diritto di difesa dell'accusato»: *Ibidem*, 252.

c) *Incorporación de las pruebas acusatorias y participación en los interrogatorios*

En este tema, las características propias de cómo se comete el delito tiene una influencia muy directa a cómo, desde hace siglos, la CDF ha planteado las normas sobre la consecución de las pruebas del delito. Históricamente la SCSO se basó en conseguir la certeza moral de la comisión del delito por una doble vía. En primer lugar se buscaba que en la declaración-denuncia del penitente apareciera la objetividad de lo que realmente ocurrió: palabras, gestos, etc., ya que partiendo de ello, el Ordinario o la SCSO dictaba sentencia. La segunda vía se dirigía a buscar la credibilidad de la denuncia, buscando otros indicios que dieran alguna pista sobre la fama del sacerdote, del denunciante, motivos de enemistad, etc.

Una vez que se ha conseguido esa certeza, como ya hemos estudiado anteriormente, se instruía el proceso en la SCSO o en la Curia diocesana. Las pruebas del proceso provenían de la indagación previa realizada por el Ordinario o su delegado. Poco podía hacer el sacerdote acusado en cuanto a proponer preguntas a realizar a los testigos (a esto hay que añadir que, en ocasiones, sólo conocía la acusación y las declaraciones, sin saber quién era en concreto el denunciante y los testigos). La prueba testifical que el sacerdote podía pedir que se realizara, o que se aportara al proceso, tenía que ir en otra dirección. Todo esto hacía que su derecho de defensa en el proceso quedara mermado.

Tanto la doctrina codical del 17, como la actual, comenta poco la situación que se encuentra el sacerdote en la celebración del proceso sobre la prueba testifical. Los pocos comentarios que hay se refieren a la necesidad-oportunidad de que el sacerdote acusado pueda examinar *todas* las pruebas que haya contra él, que por la naturaleza del delito son testimonios de personas. Pero no se plantean la posibilidad de que el sacerdote acusado solicite un nuevo examen de algunos testigos proponiendo, en su caso, preguntas para que las contesten. Nos parece que la futura regulación debería abrir esta posibilidad, quizá, dejando a juicio del tribunal el aprobar o rechazar este nuevo examen de los testigos, y la oportunidad de realizar las preguntas que el sacerdote acusado haya propuesto que se les formulen, o, en atención a lo que el acusado alega, realizar el propio tribunal otras preguntas de oficio (cc. 1558-1571 CIC 83)¹⁵².

En cuanto a la consecución de las pruebas, las normas de la SCSO ponían el acento en la declaración-denuncia del penitente, así como de otros testimonios de personas que, por otras circunstancias, podían haber sido solicitadas. Parte de la doctrina considera que en estos procesos de solicitud se debe tener en cuenta la norma establecida en el c. 1550 § 2,2º CIC 83, por la que se consideran incapaces de ser testigos en un proceso a «los sacerdotes, respecto a todo lo que

152. Cfr. cc. 1767, 1770-1781 y 1787 CIC 17.

conocen por confesión sacramental, aunque el penitente pida que lo manifiesten; más aún, lo que de cualquier modo haya oído alguien con motivo de confesión no puede ser aceptado ni siquiera como indicio de la verdad»¹⁵³.

Tal como viene descrito en el c. 1387 CIC 83, el delito de sollicitación en confesión puede ser perpetrado *in actu confessionis, in praetextu vel in occasione confessionis*. Esta doctrina considera que por fuerza del c. 1550 § 2,2º, cuando el sacerdote cometa la sollicitación *in actu confessionis*, al tratarse de hechos que se han dado dentro de la confesión y, por tanto, ésta sólo puede ser conocida por las declaraciones del penitente o de uno que oiga la sollicitación realizada por el sacerdote, las declaraciones que puedan realizar no serían aprovechables en el proceso por que lo prohíbe dicho c. 1550 § 2,2º. Para esta doctrina, una posible sanción penal entraría sólo en consideración, en divergencia a lo establecido en el c. 1387 CIC 83, cuando el hecho fuese cometido solamente *in occasione* o *praetextu confessionis*, por tanto no dentro de una confesión sacramental, pues, al cometerse este delito dentro de la celebración del sacramento de la penitencia, pertenece al *forum internum sacramentale*, por lo que no sería posible dar una sentencia (ni por parte del Ordinario del lugar, ni por parte de la Congregación) al no ser posible conseguir una prueba válida para el proceso¹⁵⁴. Por esta misma concepción, esta doctrina considera que el confesor está además incapacitado, por el secreto de la confesión, para su defensa en estos casos de denuncias de sollicitación *in actu confessionis*¹⁵⁵.

Nos parece que lo que realmente establece el c. 1550 § 2,2º es la incapacidad del sacerdote para ser testigo acerca de lo que conoce a través de la confesión, etc., y no sólo acerca de los pecados que se le hubieren confesados: es decir, todo lo que se relaciona con la materia del sigilo sacramental y secreto natural, a los que se refiere el cc. 983 § 1 y 984-985 CIC 83¹⁵⁶; en cuanto a los

153. Cfr. c. 1757 § 3,2º CIC 17.

154. «Bei Taten, die in actu confessionis, also innerhalb der Beichte begangen sind, sind als Beweismittel nur die Aussagen des Pönitenten oder eines Mithörers denkbar. Sie sind aber im Verfahren nicht verwertbar (1550 § 2,2º Satz 2). (...) Eine Bestrafung kommt daher, abweichend von der Aussage des 1387, nur in Betracht, wenn die Tat in occasione vel praetextu confessionis begangen wurde, also nicht innerhalb einer sakramentalen Beichte. Wenn die SC DoctFid in einer Stellungnahme zu can. 37 SchPoen (1353 heutiger Zählung) vorbrachte, gegen einen Spruch der Kongregation "in materia sollicitationis" solle es kein Rechtsmittel geben, da ein solcher Spruch vom Papst approbiert werde und die Natur der Straftat —"forum sacramentale"— eine Berufung ausschliesse (Comm. IX [1977] 168), so stimmt nur der erste Teil der Begründung. Wenn die Tat nämlich zum forum internum sacramentale gehört, weil sie innerhalb der Feier des Beichtkramentes begabgen wurde, kann es gar keinen Spruch der Kongregation ben, weil ein Beweis nicht möglich ist»: K. LÜDICKE, *Comentario al c. 1387: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, Essen 1988-1998, n. 6.

155. «Der Beichtvater ist zudem durch das Beichtgeheimnis an seiner Verteidigung gehindert»: *Ibidem*, n. 6.

156. Cfr. cc. 889 § 1 y 890-891 CIC 17.

pecados confesados, se equiparan al confesor todos aquellos otros que cómo intérpretes o como oyentes fortuitos, etc., tuvieron conocimiento de cosas dichas en confesión (c. 983 § 2 CIC 83¹⁵⁷)¹⁵⁸. Pero en nuestro caso, conviene recordar que la denuncia por parte del penitente, así como las declaraciones de los testigos, se refieren a palabras o gestos y acciones del sacerdote que no están en relación con la acusación de los pecados del penitente —objeto del sigilo y secreto sacramental—, sino que se trata de declarar la actuación abusiva de parte del sacerdote, al utilizar el momento de la confesión de un penitente, para cometer él un delito. Baste recordar que la propia Congregación acepta del sacerdote la confesión de que ha cometido el delito; si acepta que el propio sacerdote hable y explique las circunstancias de cómo cometió el delito *in actu confessionis*, cuánto más para admitir como prueba la declaración del penitente o de un tercero.

d) *La sentencia*

Como indica parte de la doctrina, de la prohibición de manifestar el nombre del denunciante y de los testigos deriva la no publicación integral de los actos del proceso (c. 1598 § 1 CIC 83 y c. 1281 § 1 CCEO) y que, por tanto, no esté completa la motivación del *in facto* de la sentencia (cc. 1611, 3º; 1612 § 3; 1622, 2º CIC 83¹⁵⁹). Como es obvio, a la hora de dictarse la sentencia, la certeza moral del tribunal deberá estar fundada en la integridad de lo alegado y probado (c. 1608 § 2 CIC 83), y no sólo de los actos que se hayan manifestado al acusado o a su defensor, y que dicha certeza moral deberá ser justificada en la sentencia (*ex natura rei* y en atención del tribunal de apelación) mediante las oportunas llamadas a los actos completos de la causa¹⁶⁰.

Esta sentencia de los tribunales de los Ordinarios de primera instancia puede ser apelada a la CDF. Según la doctrina, las normas propias vigentes ofrecen este derecho de apelación a la CDF con efecto suspensivo¹⁶¹.

157. Cfr. c. 889 § 2 CIC 17.

158. Cfr. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Comentario al c. 1550*: Com. Exe., IV/2, 1336.

159. Cfr. cc. 1294, 3º; 1295 § 3; 1304, § 1, 2º CCEO.

160. Cfr. J. LLOBELL, *I delitti reservati...*, 252. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Comentario al c. 1598*: Com. Exe., IV/2, 1481-1487. Llobell, en un estudio monográfico sobre la motivación de la sentencia canónica, indica que siempre en la praxis judicial canónica ha existido una motivación en sus sentencias (alcanzar la certeza moral de la verdad), aunque no siempre en el derecho positivo canónico se ha exigido el manifestarlo a las partes y, en qué medida, el no manifestar a las partes los motivos que llevan al juez a dictar una sentencia afectan a la nulidad de la misma J. LLOBELL, *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, Zaragoza 1985.

161. Cfr. J. LLOBELL, *I delitti reservati...*, 261.

2. Constitución del tribunal y desarrollo de los procesos criminales en la CDF

Las noticias que se tienen sobre este tema provienen de la doctrina, en un momento en el que dentro de la Curia Romana se están revisando los reglamentos internos de actuación, tras la promulgación de la PB.

Para Llobell, en el ordenamiento vigente es claro que la potestad judicial de la CDF la poseen los miembros de la Congregación, es decir los Cardenales y Obispos (a tenor del art. 3 § 3 PB), ya sea en sesión plenaria u ordinaria¹⁶². Este autor se plantea si el Prefecto de la CDF tiene la facultad de delegar la potestad judicial del Dicasterio a personas que no sean «miembros»¹⁶³, ya que a tenor del c. 135 § 3 se prescribe la indelegabilidad del poder judicial vicario, si no es para realizar los actos preparatorios de un decreto o sentencia. Algún autor afirma que la CDF tiene esta potestad¹⁶⁴. Por otra parte, ¿no sería deseable que estos juicios sean llevados directamente por jueces competentes en materia judicial y penal? Es decir, en la Congregación, ¿deberían dictar sentencia los Cardenales y Obispos, o sería más conveniente que se nombrasen jueces para dictar sentencias en estos procesos? Teniendo en cuenta que se trata de un juicio penal, donde el juez o los jueces deben valorar jurídicamente las pruebas, y donde el aspecto doctrinal apenas tiene relevancia, parece que esto sería lo más oportuno.

Otras de las cuestiones debatidas es si las sentencias que la CDF emite son apelables o no. En relación a este tema nos parece interesante hacer resaltar la sugerencia que realiza la CDF en sede de comisión de codificación, según la cual la sentencia dictada por la Congregación en materia de solicitudación no es apelable porque era aprobada por el Romano Pontífice y porque la naturaleza del delito (*forum sacramentalem*) excluye la apelación¹⁶⁵.

Con relación a la afirmación de que una sentencia de solicitudación no es apelable porque la naturaleza del delito excluye la apelación, nos parece que no es una afirmación sostenible: el delito es un abuso del sacramento de la penitencia, en cuanto que el sacerdote se aprovecha de una posición privilegiada como confesor, para realizar la acción delictuosa, que no tiene nada que ver con el foro de la conciencia ni con el foro sacramental.

162. Cfr. *Ibidem*, 262. Ver también el comentario que realiza J.I. ARRIETA, *Const. Ap. Pastor Bonus*, en VV.AA., *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Milano 1997, 243-244, nota al art. 52.

163. Cfr. J. LLOBELL, *I delitti riservati...*, 262-263.

164. «Non pare che si possa applicare il principio della indelegabilità del potere giudiziale per la CDF, a norma del c. 135, §3 perchè nulla esclude che la stessa CDF possa nominare giudici che non facciano parte della stessa Congregazione; in ogni caso la stessa CDF pare che abbia le debite facoltà»: V. DE PAOLIS, *La collocazione della Congregazione per la Dottrina della Fede...*, 589, nota 32.

165. Cfr. «Communicationes» 9 (1977) 168.

En cambio, como indicaba la CDF las sentencias que se daban en la Congregación eran aprobadas por el Romano Pontífice. Teniendo en cuenta la nueva regulación de la Curia Romana, y para que se pueda garantizar la posibilidad de impugnar una sentencia nula o claramente injusta (querrela de nulidad y *restitutio in integrum*) o, porque proveniese de una apelación de un tribunal de primera instancia, sería deseable que estas sentencias no fueran sometidas a la aprobación del Romano Pontífice de manera específica (art. 18 a) PB)¹⁶⁶. Para garantizar este derecho de apelación, cuando la sentencia de primera instancia fuese pronunciada en la propia Congregación, sería conveniente la constitución de turnos de tres o cinco jueces, análogamente a cuanto ocurre en la Signatura Apostólica¹⁶⁷.

3. *Propuestas conclusivas*

Todos estos comentarios se refieren a la constitución de la CDF como tribunal y siguiendo el proceso ordinario penal, que con la REU se aplicaba a los procesos penales contra la fe. Pero, como la propia REU decía, en lo referente al sacramento de la penitencia, la Congregación actuaba según unas normas pro-

166. Cfr. J. LLOBELL, *I delitti riservati...*, 263.

167. Cfr. *Ibidem*, 263. Comentando el contenido de la PB y las futuras implicaciones que procurraría en el funcionamiento y estructura de la Congregación, un oficial mayor del Dicasterio — A. Silvestrelli— señalaba que, en relación al personal de la Congregación en cuanto se constituye como tribunal, debería estar compuesto por:

- un Promotor de Justicia, que deberá examinar las denuncias que lleguen a la Congregación y dar su voto al Congreso Particular de la Congregación proponiendo si se prosigue la causa o no, y en su caso por vía administrativa o judicial. Decidido por el Congreso Particular el actuar por vía judicial, el Promotor de justicia es el encargado que todo se tramita según lo dispuesto en el CIC 83 para las causas criminales. Si el proceso se realiza en la Congregación, deberá estar presente en el interrogatorio de las partes y de los testigos. Al fin, el Promotor de justicia será el que realice la acusación criminal;

- el Congreso Particular de la Congregación, para decidir si actuar la vía judicial o administrativa;

- un juez instructor y un número de jueces suficiente como para poder formar al menos tres turnos, excluido el juez instructor que no podrá formar parte de los turnos: como en algunos delitos se puede poner como sanción la expulsión del estado clerical, éste deberá ser colegial de tres jueces (c. 1425, § 1, 2º);

- un tribunal extraordinario para juzgar acerca de los recursos extraordinarios de la *querela nullitatis* y de la *restitutio in integrum*, que sería la Congregación Ordinaria;

- deberá constituirse un colegio de abogados y de procuradores, los cuales deberán reunir los requisitos de ser expertos no sólo en el campo jurídico sino también en el campo teológico, al fin de poder representar y defender al acusado: Cfr. A. SILVESTRELLI, *La Congregazione della Dottrina della Fede*, en AA.VV., *La Curia Romana nella Const. Apost. Pastor Bonus*, Città del Vaticano 1990, 232-233.

pías. Con la PB, estas normas propias siguen vigentes: es deseable, como señala la doctrina, que en la revisión de estas normas en el futuro por parte del legislador universal, siga el modelo del proceso penal ordinario, al menos en cuanto a las garantías que este último establece en derecho de defensa del inculpado, teniendo en cuenta las características peculiares que tiene el delito de solicitación. En este sentido, la multiseccular experiencia de la Congregación en enjuiciar estos delitos no puede desecharse de antemano, especialmente en cuanto al sumo cuidado con que se procede en la inquisición del delito para no infamar a los sacerdotes, y la consecución de las pruebas y otros indicios para llegar a la certeza moral de la comisión del delito (o la oportunidad de tomar medidas gubernativas contra el sacerdote, o de imponerle penitencias u otros remedios penales, a tenor de lo que establece el derecho): entre ellas, quizá serían oportunas que se conservasen las cautelas formales de juramentos de guardar secreto que se impone a todos los que intervienen en estos procesos.

Por otra parte, que el procedimiento a seguir sea formal y detallado (como los formularios de preguntas a realizar al denunciante, testigos, etc.), nos parece que es un elemento que favorece a la defensa del inculpado y, por tanto, más garantizadora que si se dejase libertad en la forma de seguir el interrogatorio: de todas formas, el juez debería tener también libertad para realizar otras preguntas, si en el desarrollo del proceso estimase oportuno realizarlas.

Nos parece que la futura revisión debería especificar claramente:

— si los tribunales de los institutos clericales religiosos de derecho pontificio tienen competencia, y para qué casos, como tribunales de primera instancia en estas causas;

— dado que el delito de solicitación en confesión está regulado tanto para los católicos de rito latino como oriental, se deberían promulgar para ambos ámbitos;

— si los tribunales inferiores deben seguir comunicando toda *notitia criminis* que les llegue, antes de proceder contra un sacerdote;

— si estos tribunales de primera instancia deben ser unipersonales como lo exigía las normas propias de la SCSO (SCSO, Instr. QSP), o si debe ser un tribunal colegiado de al menos tres jueces para enjuiciar los delitos que pueden comportar la dimisión del estado clerical prescrita con los nuevos Códigos (c. 1425 § 1 CIC 83 y c. 1084 § 1 CCEO);

— la existencia de la apelación de una sentencia dictada por un tribunal de primera instancia y su efecto suspensivo; así como la posibilidad de solicitar a la CDF los recursos extraordinarios de la *querela nullitatis* y la *restitutio in integrum* contra de la sentencia ya dictada, así como el *iter* que deberían seguir estos recursos.

En cuanto al derecho de defensa del inculpado, nos parece que las futuras normas deberían tener en cuenta lo que establece el CIC 83 en cuanto a la visión y conocimiento de las pruebas que existan contra él: en este sentido, nos parece

que *a priori* al sacerdote inculpado se le puede comunicar los nombres del denunciante y de los testigos. Además, nos parece necesario que se diera la posibilidad de examinar de nuevo a los testigos, en los supuestos en que se viera oportuno por el tribunal, a petición del sacerdote acusado o de oficio por el propio tribunal en atención a las alegaciones realizadas por el acusado.

Otro de los puntos que convendría incluir, para garantizar el derecho de defensa en las futuras revisiones es que:

— «el acusado tiene siempre derecho a escribir o hablar en último término, bien personalmente o bien por su abogado o procurador» (c. 1725 CIC 83 y c. 1478 CCEO);

— «el acusado no tiene obligación de confesar el delito, ni puede pedírsele juramento» (c. 1728 § 2 CIC 83 y c. 1471 § 2 CCEO).

Como conclusión final pensamos que parece muy conveniente que el Legislador supremo indique en una norma: a) los delitos reservados a la CDF; b) las modificaciones a la la reserva de la competencia de los órganos que de otra forma serían los competentes para juzgar de esos delitos; c) el especial término de prescripción de la acción penal de cada uno de los delitos; d) en el supuesto de que los tribunales periféricos sean competentes, si deben aplicar alguna norma procesal especial.

ANEXOS

SUMARIO. Instr. *Si fá un memoriale*. Instr. *Quae Supremus Pontifex*. Instr. *Non raro*. Instr. *Instructionis S. Romanae*

1. Instr. «*Si fá un memoriale*», 1669¹⁶⁸

«Si fá un memoriale dalla denunciante, nel qual narra di haver da esporre cose pertinenti al Tribunal del S. Officio, che perciò priega sua Signoria Illustrissima commettere a persona religiosa, che con ogni segretezza vada a ricevere detta denuncia nel tal luogo a fine di liberare da ogni scrupolo la conscientia di essa supplicante, sottoscrivendo a piedi del memoriale il nome, e'l cognome di essa esponente, potendo mandarsi detto memoriale del Confessore al Prelato, il quale udendo dire, che gli si va hà proporre negotio spettante alla Santa Inquisitione, dee riceverlo con grandissimo segreto, assumendo almeno due persone gravi, religiose, e zelanti, una delle quali se ne servirà per scrivere gli atti, che occorrono, come sarebbe.

168. Regula el procedimiento a seguir en la denuncia de solicitud. Cfr. J. PIGNATELLI, *Consultationes canonicae...*, I, sent. 104, 128-129.

Die 10 Mense Maii anni 1686, in Palatio Episcopali N. in aula interiori eiusdem solitae habitationis Illustrissimo ac Reverendissimo D. Episcopi N. coram eodem D. Illustrissimo ac Reverendissimo assistente R. D. Canonico Cathedralis N. et in praesentia mei D. N. Sacerdotis Ecclesiae N. actuarii assumpti ad hunc actum, comparet R. P. Fr. N. N. professus Sacerdos Theologus Ordinis N. exponens videlicet:

Vengo avanti a V. S. Illustrissima a portarle questo memoriale contenente negotie del S. Officio consignatomi da N. N. la quale con occasione, che io sono andato a confessare alla Chiesa N. mi è stato dato da lei, a fine che io con ogni segreto lo presenti a V. S. Illustrissima, acciocchè deputi una persona, che riceva la denuncia di questa supplicante, la quale mi ha detto, che se venisse di persona darebbe da sospettare altri negotii a' suoi parenti, il che le potrebbe cagionar gran danno.

Ovvero se la supplicante non saprà scrivere, potrà inviare detto Religioso a dire a bocca tutto ciò, che chi sa scrivere direbbe per memoriale, e si procederà nel modo come di sopra dal prelato, mutatis mutandis.

L'Attuario noterà ogni cosa per extensum.

Tunc illustrissimus dominus ex praedictis commisit eidem P. Fr. N. N. Professo Religiosis, etc. ut accedat ad locum N. ad finem accipiendi denuntiationem faciendam ab N. N. iuxta instructionem Tribunalis S. Officii, quam praecepit sibi dari a me Notario assumpto, exacto prius iuramento, tam a praedicto R. P. N. N. tangendo, prout tetigit Sacra Evangelia, et pro veritate omnium supradictorum, et pro bene, ac fideliter recipienda denuntiatione sibi danda, ac sub silentio omnia retinendi, quam a vobis Assistentibus, et a me de non praesentia propalando, nec in totum, nec in partem, prout iuravimus tactis Sacris praedictis Evangeliiis, imponendo dicto Patri, et vobis de toto praesenti negotio silentium sub poena excommunicationis latae sententiae statim incurrendae in casu contraventionis eidem Illustrissimo respectu Assistentis, et mei ipsius, et Sanctiss. D. Papae respectu praedicti R. P. et fuit dimissus praesens tutus cum mandato, ut omnes subscribamus.

Ego Pater Fr. N. N. professus S. T. P. ord. N. praedicta omnia exposui.

Ego N. N. canonicus Ecclesiae N. assistens deputatus interfui.

Ita est.

N. N. sacerdos Ecclesiae N. Actuarius assumptus ad hunc actum ab Illustrissimo D. N. Episcopo N.

Il Delegato del Vescovo anderà con carta, e calamaio, se non potrà accompagnarsi col Notaio predetto, o Assistente, almeno esso solo nel luogo, tempo, e giorno più opportuno per osservanza del segreto, e venendo la denunciante, ha da scrivere nel presente modo.

Die... mense... anni, etc., in tali loco s'acerta, che sia fuori del confessionario, e non potendosi, si noti il luogo, ubi solent sacramentales confessiones excipi, sed haec omnia extra sacramentum Poenitentiae, comparet coram me N. N. professus talis Religionis, qui di mandato Illustrissimi et Reverendissimi D. Episcopi N. accessi ad finem, etc., talis de tali aetatis suae annorum... ut dixit, et ex aspectu apparet saecularis, vel monialis, professa vel Bizoca, vidua q. N. N. vel uxorata, etc., e ponendo il nome del Padre, della Madre, luogo dove habita, professione che eser-

cita, confini della Parochia, paese, o tempo, che ne manca, statura, pelo segnali, e altre circostanze, che ponno descrivere la persona, quando non fusse ben nota alla Corte Vescovile, sponte, non citata, neque vocata, quae medio eius iuramento sibi per me dato, tactis Sanctis Evangeliiis mei Breviarii, prout tetigit de veritate dicenda, prius monita de gravitate eiusdem fuit interrogata ad quid venerit, quae respondit:

Sono venuta, come dissi, a V. Reverenza la settimana passata, che mi voleva io sgravare la coscienza, già che mi havete detto, che sono obligata di denunciare il Confessore, che mi ha parlato di cose brutte, quando io mi Confessava, desidero sapere, se avete parlato a Monsignor Illustrissimo, e che vi ha detto.

Cui a me fuit dictum habere in commissis recipiendi formiter suam denuntiationem, ac proinde pro exoneratione suae conscientiae explicite fuit interrogata, ut dicat quidquid sibi occurrerit circa praedicta a se superius nominata. Respondit, e si pongano le sue proprie parole volgari che, dice, ben vero siano chiare, et esplicative il Confessore sollecitante per nome, cognome, Religione, o dignità, giorno, mese, anno, volte che sollicitò, segni, contrasegni, habitatione, luogo dove habita, o habitava il sollecitante, parole dette, espresse, segni, seu alti fatti, e tutte le circostanze, che conducono alla replicata chiarezza del sollecitante, o della sollicitatione.

Avvertendo, che se la persona non si sapesse esplicare, il Deputato con gl'interrogatorii, che anderà facendo, farà esplicare le cose predette necessariamente.

Gl'interrogatorii, benchè si diano in volgare, si scrivano in Latino. Verbi gratiae.

Interrogata, quaenam verba specialia, vel quosnam actus inhonestos fecerit praedictus N. Confessarius ipsi testi exponenti, et dicat explicite, et clare omnia. Respondit, mi disse, etc.

Se la sollicitatione è di qualche tempo passato, e che dice.

Interrogata, quare prius non exoneravit suam concientiam denunciando praedictum. Respondit, etc.

Interrogata de contestibus. Respondit: Questo fatto è passato da solo a solo fra me, e'l detto N. N. mentre io mi confessava nel confessionario, come ho detto di sopra, e perciò non v'è persona, che lo possa deporre.

Interrogata, an exerceat aliquam inimicitiam, vel aliquam exercuerit cum d. N. N. Confessario, vel cum suis consanguineis, aut amicis, vel e contra. Respondit, etc.

Interrogata, cuius famae sit praedictus N. N. Confessarius, et an audierit aliquando ab aliis similia praedictum N. N. patrasse. Respondit, etc.

Si avverta, che le riposte (non mi ricordo) non s'ammettano, ma si domanda dopo quelle, et fuit dictum a me, ut bene recordetur, etc.

Se parlasse con ira, e con passion grande, che dasse sospetto d'inimicitia, dal Notaro, o dal deputato si noti, videlicet locuta est nimis iracundae, etc., vel animose, aut temere.

Interrogata, an viderit ipsa comparens praedictum N. N. Confessarium fecisse aliqua opera spiritualia, videlicet orare, eleemosynas elargiri, missas auscultare, et similia. Respondit, etc.

Quibus habitis, ego ipse mandavi, ut se subscribat, imponendo silentium, ut nullatenus alicui dicat, se revelasse et denunciasset, praedicta in totum, vel in partem contra praedictum N. N. Confessarium sub poena excommunicationis ipso facto incurrendae reservatae ipsi D. Illustrissimo Episcopo. E se sarà necessario S. D. Papae. Et fuit dimissum examen, praestito denuo iuramento tactis, etc., prout tigit de silentio observando super praedictis.

Io N. N. ho deposto come sopra.

Overo + Et quia scribere nescit, fecit signum crucis cum calamo a me dato.

Ita est, ego N. N. Professus Ordinis N. de mandato Illustr. etc., accessi et interrogavi.

Le scritture sopra questa materia non si considino a' Ministri, ma o si consignino al Tribunale Supremo, ovvero si sugellino, scrivendovi sopra, Scritture, che appartengono al tribunale del S. Ufficio, quali nissuno può aprire, lacerare, bruciare, o occupare sotto le pene imposte nella Bolla del B. Pio V, che comincia *Si de protegendis*, cautelandosi, a fine che in vita detti negotii passino come quelli del suggello, Sacramentale, e prevedere in caso di morte non vadino in potere dei Commissarii degli spogli, ministri della Sedia vacante, o Cortegiani di Prelati Defonti, i quali perlo più, non havendo molta coscienza, o publicano i negotii, o li consegnano in mano delle parti per mercede. E questo basti per una breve, e facile istruzione.

Per maggior chiarezza si pone una forma di denuncia, cioè le parole della donna sollicitata.

Per disgravio della mia coscienza denuncio al Tribunale del S. Ufficio, e per esso a V. S. o a V. R. che viene in nome di Monsignor Illustriss. come haverà da un mese, che essendo andata a confessarmi nella Chiesa N. N. nella festività N. 20 del mese di Settembre, m'ingionacchiai nel Confessionario di mano destra dell'altare sotto il pulpito di detta Chiesa, dove stava ascoltando le Confessioni D. N. N. Prete secolare, o regolare, e mentre stava io in detto Confessionario Confessando Sacramentalmente i miei peccati, mi disse parole disoneste, e sensuali, e che havrebbe voluto, et o fece il tal'atto, e dette queste parole (e si narra distintamente il fatto). Del que rimasi scandalizzata. E questo è quanto occorre.

Interrogata, etc., ut melius explicet illa verba (se pure fossero state dette ambigue, o dubie) e seguita come sopra.

Ricevuta la scritta revelatione, il Prelato avverta di conservarla con ogni segreto. Se il caso sarà grave, ovvero fossero più rivelazioni contro uno stesso Confessore, potrà detto Vescovo farne copia, avvertendo di dare il giuramento, quando assume persona molto grave per fare detta copia, e inchiuder gli atti in una sua, che potrà scrivere alla S. Congregazione del S. Ufficio di Roma a fine che gli ordini, come si ha da portare in tal caso, e chiegga l'istruzione per no errare, avvertendo di più de non far alcuno motivo contro il denunciato, acciochè non penetri essere reo nel Tribunale, nè comunichi tal segreto al suo Superiore, o ad altro, che sia nel Mondo, perchè sarebbe error grave in materia di S. Ufficio»

2. Instr. «*Quae Supremus Pontifex*», 20.II.1867¹⁶⁹

«*Quae Supremus Pontifex* gl. mem. Benedictus XIV in Constitutione die 1 Iunii 1741 edita cuius initium est *Sacramentum Poenitentiae*, confirmavit ac decrevit, ea ad haec quatuor maxime capita reducuntur. In primis, quemadmodum iam antea sancitum fuerat, praesertim a Gregorio XV Constitutione quae, sub die 30 Augusti 1622 data incipit *Universi*, omnes locorum Ordinarii aequae ac Inquisitores deputantur iudices ad inquirendum et procedendum et condignis poenis animadvertendum contra sollicitantes ad turpia in confessione, quamvis ab ordinaria iurisdictione quomodolibet exemptos. Itidem omnes Sacerdotes ad audiendas sacras Confessiones constituti, sicut antea quoque praescriptum erat, obligantur monere suos poenitentes, ut sollicitantes huiusmodi, quamprimum poterunt, Inquisitoribus aut locorum Ordinariis deferant; eosdemque poenitentes non absolvere, qui huic adimplendo muneri parere recusent. Praeterea tertio loco Apostolicae Sedi reservatur, excepto mortis articulo, eorum casus qui innoxios Sacerdotes apud ecclesiasticos iudices falso sollicitationis insimulant, vel sceleste procurant ut id ab aliis fiat. Quarto denique Sacerdoti cuilibet omnis facultas et iurisdictione ad sacramentales Confessiones personae complicitis in peccato turpi contra sextum decalogi praeceptum commisso excipiendas adimitur, nisi extrema prorsus urgeat necessitas, nimirum si ipsius mortis articulo alter Sacerdos desit, qui Confessarii munere fungatur, vel sine gravi aliqua exortura infamia vel scandalo vocari aut accedere nequeat. Et Apostolicae Sedi reservatur eorum confessoriorum casus, qui complicem in peccato turpi absolvere ausi fuerint.

Nullum sane dubium est, quin hae praescriptiones, prohibitiones, reservationes omnes et singulae in cunctas nationes universim vires suas extendant, et ubique terrarum *inconcusse ac inviolabiliter* observandae sint. Quod quidem vel legenti Gregorii XV et Benedicti XIV Constitutiones evidentissime patet; et idipsum consequentium Pontificum suffragio, prout se dedit occasio, ad hanc usque diem confirmatum est. Et re quidem vera Vicario Apostolico Cocincinae sciscitanti: 1. *An Constitutio Bened. XIV adversus sollicitantes obliget etiam missionarios franciscanos, qui ministerium exercent in Cocincina?* 2. *An eadem Constitutio restringi possit ac moderari in aliquo casu ob magnam Confessoriorum penuriam in eodem regno Cocincinae?* iussu Pii VI anno 1775 opportuna Instructione responsum fuit: *Ad 1. affirmative. Ad 2. negative.* Et proxime SSmus D. N. Pius Papa IX decreto huius supremae Inquisitionis sub feria IV, die 27 Iunii anno 1866 edixit, *in facultatibus quibus Episcopi aliique locorum Ordinarii ex concessione Apostolica pollutat absolvendi ab omnibus casibus Apostolicae Sedi reservatis excipiendis semper in posterum et exceptos habendos esse casus reservatos in bulla Benedicti XIV, quae incipit: Sacramentum Poenitentiae.* Hoc decretum vero omnibus ubique terrarum Ordinariis praedicta absolvendi facultate donatis absque ulla exceptione significandum mandavit.

169. Procedimiento a seguir en las denuncias de solicitudión. Cfr. ASS 3 (1867-1868) 499-505.

Quamobrem omnibus locorum Ordinariis enitendum summpere est, ne eorum vigor, quae in praedicta Constitutione salubriter providentur, paulatim uspiam elanguat. At Emi PP. Cardinales supremi Inquisitores nuper cognoverunt, eandem Constitutionem non ubique, sicuti par esset, executioni tradi, atque in aliquibus locis nonnullos tum in denunciationis onere adimplendo, tum in iudicio contra sollicitantes instituendo, irrepsisse abusus, qui sine iustitiae ac providae severitatis discrimine tolerari minime possent. Itaque neque inopportuno, neque ipsis locorum Ordinariis ingratum fore iudicarunt, si quae contra eosdem abusus ab hac suprema Congregatione ad tramites sacrorum canonum decreta fuerunt, in unum collecta prae oculis habeantur. Ad quem effectum praesentem instructionem edi mandarunt.

1. Personae sive mares sive feminae, quaecumque illae sint, ad turpia sollicitatae in Confessione vel occasione aut praetextu Confessionis, quemadmodum enucleate in memorata Constitutione praecipitur, rem ad Sanctam Sedem vel ad loci Ordinarium deferre debent.

2. Denunciare oportet quemcumque Sacerdotem etiam carentem iurisdictione, sollicitantem in Confessione, vel etiam poenitentis sollicitationi consentientem, quamvis statim dissentientem de turpi materia loqui, illius complementum ad aliud tempus differentem, et non praebentem absolutionem poenitenti.

3. Huiusmodi denuntiationes a nemine absque culpa lethali omitti possunt. Qua de re poenitentes debent admoneri, neque ab iis admonendis instruendisque eorum bona fides excusat.

4. Sacerdotes ad sacras audiendas Confessiones constituti, qui de hac obligatione poenitentes suos non admonent, debent puniri.

5. Poenitentes admoniti, et omnino renuentes nequeunt absolvi: qui vero ob iustam causam denunciationem differre debent, eamque quo citius poterunt faciendam spondent serioque promittunt, possunt absolvi.

6. Denuntiationes anonymae contra sollicitantes ad turpia nullam vim habent: denuntiationes enim fieri debent in iudicio, nempe coram Episcopo eiusve delegato cum interventu ecclesiastici viri, qui notarii partes teneat, et cum iuramento, et cum expressione et subscriptione sui nominis, nec sufficit si fiat per apochas vel per litteras sine nomine et cognomine auctoris. Ceterum prohibetur, ne recipiendis denuntiationibus praeter iudicem et notarium, virum utrumque ecclesiasticum, speciali et scripto exarata Episcopi deputatione munitum, testes intersint. Cavendum quoque ne ex denuntiantibus quaeratur, num sollicitationi consenserint: et convenientissimum foret, si de huiusmodi consensu quantumvis sponte manifestato nihil notetur in tabulis.

7. Denuntiationis onus est personale et ab ipsa persona sollicitata adimplendum. Verum si gravissimis difficultatibus impediatur, quominus hoc perficere ipsa possit tunc vel per se, vel per epistolam, vel per aliam personam sibi benevisam suum adeat Ordinarium, vel Sanctam Sedem per sacram Poenitentiarium, vel etiam per hanc supremam Inquisitionem, expositis omnibus circumstantiis, et deinde se gerat iuxta instructionem quam erit acceptura. Si vero necessitas urgeat, se gerat iuxta consilia et monita sui Confessarii. Ast si nullo impedimento detenta denuntiationem omnino renuat, in hoc casu aliisque supra memoratis, laudandus est Confessarius, qui operam suam poenitenti non denegaverit, et vel Ordinarium vel

Sanctam Sedem pro opportunitis providentiis consuluerit, suppresso tamen poenitentis nomine. Formulas autem hisce in casibus adhibendas tradunt probati auctores, quos inter Pignatelli t. 1 consult. 104, Carena, Albitius, etc.

8. Non infrequenter occurrit casus, ut Confessarius aliusve ecclesiasticus vir ab Episcopis (quorum utique haec potestas est) deputetur ad denunciationes recipiendas in re ad sollicitationis crimen spectante absque interventu notarii. Huic Instructioni folium adiicitur circa modum, quo hisce in casibus confici denunciatio debet. Qui enim ad hoc gravissimum munus viri maxime idonei destinantur, de actu denunciationis iudiciaria ratione assumendo instrui debent ac moneri, ut statim a recepta denunciatione eam ad ipsum Episcopum a quo fuerunt deputati caute transmittant, neque confecti actus exemplum vel vestigium aliquod sibi retineant. Atque in hunc fere modum haud difficulter denunciandi munus adimpletur. Profecto a locorum Ordinariis efficiendum est, ne ad loca suae iurisdictioni subiecta applicare oporteat quod pro Missionibus Pernambuci in America die 22 Ianuarii an. 1627 declaratum fuit: *Mulieres videlicet sollicitatas non teneri ad denunciationem si ministri Inquisitionis vel vicarii Episcopi in longinquis regionibus degentes sine gravi incommodo adiri nequeant.*

9. Si in denunciationibus, quod non raro contingit, aliae indicantur personae forte pariter sollicitatae, vel quae de hoc crimine testimonium ferre aliqua ratione possint, hae quoque omnes et seorsim iudiciaria forma superius enunciata examinandae sunt: et primo per *generalia*, deinde per *gradus*, quoad ita res ferat, ad *particularia* deveniendo, interrogari debent, utrum et quomodo revera fuerint ipsae sollicitatae, vel alias personas fuisse sollicitatas viderint vel audierint.

10. Accepta denunciatione, non illico proceditur sed a Superiore ecclesiastico inquiri sedulo debet, utrum persona denunciatus sit fide digna. Sollicitationis crimen ut plurimum secreto perpetratur; hinc privilegium est, ut in causis quae contra hoc crimen instituantur, ad plenam probationem faciendam attestations etiam singulares admittantur. At in memoratis summorum Pontificum Constitutionibus praescribitur, ne cum testibus singularibus procedatur, nisi praesumptiones, indicia et alia adminicula concurrant. Ponderus igitur cuiusque denunciationis, qualitates et circumstantiae serio accurateque perpendendae sunt, et, antequam contra denunciatum procedatur perspectum exploratumque iudici esse debet, quod mulieres vel viri denuntiantes sint boni nominis, neque ad accusandum vel inimicitia vel alio humano affectu adducantur. Oportet enim, ut testes huiusmodi singulares ab omnibus privatis affectionibus sint immunes, ut ipsis integra fides haberi possit.

11. Ea est huius supremae Inquisitionis consuetudo, ut post unam alteramve denunciationem rescribatur, quod denunciatus *observetur*; ita videlicet super delato crimine suspectus habeatur, ut quum primum per novas denunciationes res explorata erit, in iudicium vocandus sit. Ut plurimum nonnisi a tertia denunciatione procedi solet. Ad formale examen vocantur Parochi, vel probatae fidei spectataeque virtutis viri, praesertim ecclesiastici, qui cum iuramento de veritate dicenda et de secreto servando super qualitatibus denunciati, et super mutuis eorum odiis et inimicitis examinentur. Hisce peractis diligentibus, reus in iudicium adducitur, et coram iudice cum interventu ecclesiastici viri, qui notarii partes

agat super singulis cuiusque denunciationis et examinis adiunctis, iuramento dicendae veritatis obstrictus respondere debet. Cavetur solertissime, ne denunciantium nomina reo manifestentur et ne sacramentale sigillum quoquomodo violetur.

12. Quando perspecta evaserit patrati criminis veritas, reo ad defensionem, prout iura exposcunt, admissio, deveniendum erit ad illi interdicendum in perpetuum, ne Confessiones excipiat, subtrahendo omnes et quascumque facultates ad id muneris eidem etiam per quodcumque privilegium vel ab ipsa Sancta Sede impertitas. Huiusmodi sententiam Episcopus ipse, et non alius ab eo delegatus, proferat; et pro modo culpae, atque omnibus attentis circumstantiis caeteras quoque poenas reo irroget quae in supradictis pontificiis Constitutionibus decernuntur. Praeterea si reus in iudicio crimen confessus fuerit, congruam debet emittere abiurationem, ut se ita purget ab ea, quam incurrit, haeresis suspicione: et hac quoque poena in ipsa sententia mulctetur. Notandum est, poenas huiusmodi omnes, et ipsam inhabilitatem ad sacrosanctum Missae sacrificium celebrandum in decreto Benedicti XIV die 5 Augusti ann. 1745 praescriptam, esse tantum *ferendae sententiae*. Abstinentum tamen erit ab infligenda degradatione et traditione brachio saeculari. Id nimirum a Gregorio XV statutum fuit: ceterum *ad terrorem* potius impositum haberi debet quam ut executioni mandetur.

13. Qui nullis omnino super hoc crimine preventi denunciationibus, conscientia victi, Ordinario loci eiusve delegato se sistunt, patrata a se sollicitationis flagitia sponte confitentur, et veniam petunt, dimitti debent cum congrua abiuratione et poenitentis dumtaxat salutaribus, adiecto consilio vel praecepto, ut ab excipiendis personarum sollicitatarum sacris confessionibus se abstineant: nec ceteris poenis antea dictis, accedentibus licet postmodum denunciationibus, afficiantur. Qui vero iudiciaria forma iam praeventi, sed nondum citati, sua sponte se sistunt; et ii pariter, quos veritatem non integram sed diminutam in spontanea apparitione confessos esse Ordinarius loci ex acceptis postea denunciationibus deprehenderit, beneficio impunitatis non gaudent, verumtamen pro ipsius Ordinarii prudentia mitius puniantur.

14. Quod in hisce causis vel ex commissione Apostolica, vel ex iure Episcoporum proprio tractandis maiorem in modum curari et observari debet, illud est, ut eadem causae utpote ad fidem attinentes, secretissime peragantur, et postquam fuerint definitae et executioni iam traditae perpetuo silentio omnino premantur. Omnes curiae ecclesasticae administri, et quicumque alii ad has pertractandas vel patroni ad defendendas causas assumuntur, iusiurandum de secreto servando debent emittere, et ipsi Episcopi aliique locorum Ordinarii ad servandum secretum obstringuntur, prout in iure cautum est cap. *Statuta* fin. de haeret. in 6, et in Clementina *Multorum*, § *Porro* de haereticis. Qui vero denunciationis oneri satisfaciunt, quippe in hisce causis examini subiiciuntur, iuramentum ab initio de veritate dicenda, et, actu expleto, de secreto servando, tactis sacro sanctis Dei evangelis, etiamsi sint Sacerdotes, praestare tenentur. Haec si caute sancteque teneantur, nullum invidiae infamiaeque vel aliud quodvis periculum timeri potest, quod vel testes a dicenda veritate, vel competentes iudices ab investigando et condignis poenis animadvertendo sollicitationis crimine contineat.

15. Indultum fuit a Pio VI in instructione, de qua antea dictum est, anno 1775 ad Vicarium Apostolicum Cocincinae data, ut cum difficillimum sit in illis tam dissitis ac disparatis regionibus ea omnia adamussim servare, quae in hisce causis servanda sunt; et cum si aliqua ex his omittantur, iustitia non patiat, ut poenae infligantur adversus reos, de quorum crimine iudicaria ratione adhuc sufficienter non constat, tunc consultius fortasse esset si extra iudicii ordinem procedatur ad occurrendum tanto malo mediis et modis magis facilibus et expeditis, quos in casibus particularibus Vicarii Apostolici prudentia cum animarum zelo coniuncta suggeret. Iam vero quisque videt hanc indulgentiam pro locis adeo dissitis, ac disparatis factam, neque omnibus esse communem, neque absque Apostolicae Sedis auctoritate iure posse ubivis induci.

16. Ceterum si locorum Ordinarii in conficiendis processibus, vel etiam, confecto processu, in proferenda sententia contra sollicitantes ad turpia in Confessione gravioribus involvantur difficultatibus, rem, transmissis actis, deferre poterunt ad hanc supremam Congregationem, quae peculiare instructiones singulis casibus accommodatas, ut saepe fit, tradet, ac definitivam sententiam, si expediens fuerit, ipsa proferet.

Haec sunt quae ad praedictam pontificiam Constitutio nem caute recteque exequendam conducunt, quaeque utpote ubique locorum observatu facilia, sacra haec Congregatio supremae et universalis Inquisitionis pastoralis Ordinariorum zelo ac sollicitudini vehementer commendat.

Datum Romae die 20 Februarii an. 1867

MODUS

Quo recipi debent denunciationes in re ad sollicitationem spectante ab iis, qui ad denuntiationem aliquam absque interventu notarii recipendam delegantur

Die... Mensis... Anni...

Sponte personaliter comparuit coram me infraescripto sistente in (*notabit locum, ubi reperitur ad actum recipiendum*) ad hunc actum tantum ab Illmo et Rmo N. specialiter delegato, prout ex eiusdem Ordinarii literis mihi directis et datis sub die (*exprimet quo die ipsi scriptae fuerint literae*) praesenti positioni allegandis, N. N. (*scribet nomen, cognomen, patrem, patriam, aetatem conditionem et habitationem personae denunciantis; et si haec religiosa fuerit, exprimet etiam nomen, quo ea vocabatur in saeculo. Deinde prosequetur*) cui delato iuramento veritatis dicendae, quod praestitit tactis SS. Dei Evangeliiis (*quae manu tangere faciet*) exposuit prout infra, videlicet:

Hic persona denunciante nec ullo sermone declarare debet, se scire obtentam esse ab Ordinario loci facultatem recipiendi absque interventu notarii, quod ad suam conscientiam exonerandam expositura est, propterea quia iustis de causis eidem Rmo Antistiti se sistere nequit: deinde narrare continuo debet quae ad sollicitationes ei factas attinent seu verba fuerint, seu scripta, seu actus, accurate describendo locum, tempus, occasionem, vices et singulas adiuncta, nec non utrum in actu Confessionis an prius vel post sacramentalem absolutionem ea evenerint. Nominare debet Confessionalem sedem et ipsum Confessarium sollicitantem, et quatenus huius nomen et cognomen aut ignoret, aut oblita fuerit, describet accurate illius personam, omnes distincte characteres notando, ita ut ille recognosci possit.

Animadvertat delegatus, non esse interrogandam personam denunciante[m], utrum consensum ad actum turpem quocumque modo praestiterit vel recusaverit, cum ipsa ad suos defectus manifestandos non teneatur. Hisce exscriptis prout narratur, neque aliud praeterea quidpiam requiret.

Interrogata: An sciat, vel dici audierit, dictum N.N. (*nominando personam*) Confessarium sollicitasse alias poenitentes ad turpia? et quatenus etc. Respondit: (*Notabit responsionem, et si haec affirmativa fuerit, nomen et cognomen personarum sollicitatarum exquiret, et causam scientiae*)

Interrogata: De fama supradicti Confessarii N.N. tam apud se, quam apud alios? et quatenus etc. Respondit: (*Responsionem exscribet*)

Interrogata: An odio vel amore praefata deposuerit, et super inimicitia, aliisque generalibus etc. et quatenus etc. Respondit: Recte (*si ad propriam conscientiam exonerandam denunciasset se dicet*). Si a sollicitatione plus uno mense praeterlapsum fuerit, erit etiam interroganda:

Interrogata: Cur tamdiu distulerit praefata denunciare proprio Ordinario, et conscientiam suam exonerare? Respondit: (*Notabit responsionem*).

Actus claudatur hac ratione

Quibus habitis et acceptatis etc. dimissus (vel dimissa) fuit iuratus (vel iurata) de silentio servando ad novum tactum SS. Dei Evangeliorum: (*super Evangelium iterum iurabit*) et in confirmationem praemissorum se subscripsit (*et si scribere nesciat*) et cum scribere nesciret, prout asseruit, fecit signum Crucis (*Crucis signum calamo faciendum ab ea exiget*).

Postquam denuncians se subscripserit, aut signum Crucis fecerit, subscribet se delegatus hoc modo:

Acta sunt haec per me N.N. ab Illmo et Rmo Antistite N.N. ut supra specialiter delegatum.

Integrum deinde actum directe ad proprium Ordinarium delegantem transmittet una cum Instructione et literis acceptis, nihil omnino apud se retinendo».

3. Instr. «Non raro», 20.VII.1890¹⁷⁰

«Non raro ad hanc Congregationem Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis transmittuntur ab Ordinariis vel a Sacra Poenitentiaria denunciations contra confessarios sollicitantes poenitentes ad turpia, et saepe accidit, ut in denunciationibus ipsis inducantur aliae poenitentes vel uti certo ad turpia sollicitatae, vel tantum ex indiciis inductae, quae tamen obligationi de denuntiatione emittenda iuxta sacros Canones satis non fecerunt. Ne autem crimen tam infandum absque debitis animadversionibus maneat, Sacra Congregatio ad tramitem Apostolicarum Constitutionum indicit locorum Ordinariis, ut inductas poenitentes opportuno examine subiiciant, ut inde legales probationes in processualibus tabulis resultent.

170. Examen de otras personas posiblemente solicitadas. Cfr. ASS 25 (1892-1893) 451-454.

Verum experientia compertum est huiusmodi examina non ita scite seu legaliter assumi a iudicibus delegatis; ita ut saepius causas ipsas, alioquin graviores in damnum ac scandalum fidelium vertentes, prosequi datum non sit.

Quapropter ne in posterum ex enunciatis defectibus in examinibus assumendis causae contra sollicitantes infectae remaneant, Sacra Suprema haec Congregatio opportunum, immo necessarium censet locorum Ordinariis instructionem iuxta decreta ac ordinationes alias editas exaratam transmittere, qua examina poenitentium per generalia rite et legaliter prosequi valeant.

Praenotandum quod nimia circumspectione utendum est in personis ad examen invitandis; etenim non semper opportunum erit eas ad publicum Cancellariae locum convenire, praesertim si examini subiiciendae sint vel puellae, vel uxoratae, aut famulatus addictae; tunc enim consultum erit eas vel in sacrario, vel alibi iuxta prudentem Ordinarii seu iudicis aestimationem caute convocare ad earum examen assumendum. Quod si examinandae vel in monasteriis, aut nosocomiis, seu in piis puellarum domibus existant, tunc magna cum diligentia et diversis diebus iuxta circumstantias peculiare vocandae erunt.

Insuper animadvertant iudices ad examina assumenda deputati quod in eorum et Cancellarii seu Notarii, qui semper ecclesiastici esse debent, praesentia examinanda exclusive compareat absque socia, absque teste; etenim omnia sub inviolabili secreto perfici necesse est.

Tandem de actibus inde assumptis ordinarii debent transmittere ad hanc Supremam Congregationem exemplar authenticum et cum suo originali collatum.

Hisce generatim praemonitis, subnectitur norma examinis conficiendi:

Modula Examinis per Generalia Assumendi

Vigore epistolae Sacrae Supremae Congregationis datae sub die... (vel vigore Decreti illustrissimi ac Reverendissimi Domini Archiepiscopi Ordinarii) vocata personaliter comparuit coram Illustrissimo ac Reverendissimo Domino N. N. asistente in Cancellaria (vel in sacrario, aut in collocatorio monialium seu piaie domus) in meique etc.

NN. nubilis (vel uxorata) degens in hac civitate N. N. in paroecia N. N., filia (vel uxor) N. N, aetatis suae... conditionis civilis (aut agricolae, aut famulatus addicta) cui delato iuramento veritatis dicendae, quod praestitit tactis SS. Dei Evangelii, fuit

Inter. An sciat vel imaginetur causam suae vocationis et praesentis examinis?
Resp...

Inter. A quot annis usa sit accedere ad Sacramentum Poenitentiae? *Resp...*

Inter. An semper apud unum eundemque confessarium Sacramentum Poenitentiae receperit, vel apud plures sacerdotes: insuper an in una eademque ecclesia, vel in pluribus ecclesiis? *Resp...*

Inter. An a singulis quibus confessa est sacerdotibus exceperit sanctas admonitiones, et opportuna praecepta, quae ipsam examinatam aedificarent, et a malo arcerent, et quatenus etc. *Resp...*

Notandum: si responsio fuerit affirmativa, id est si dicat, se bene semper fuisse directam, tunc interrogatur sequenti modo:

Inter. An sciat vel meminerit aliquando dixisse vel audivisse, quod quidam confessarius non ita sancte et honeste sese gesserit erga poenitentes, quin murmurationes, seu verba contemptibilia contra ipsum confessarium prolata fuerint: ex. gr. quod ipsa examinata, ab uno vel a pluribus poenitentibus, atque ab uno abhinc anno, vel a quatuor, aut tribus mensibus similia audierit?

Notandum: Si post hanc interrogationem et animadversionem examinata negare pergat, claudatur actus consueta forma, quae ad calcem huius instructionis prostat.

At si quidquam circa aliquem confessarium, iuxta ea de quibus interrogatur, aperuerit, ulterius interrogabitur prout sequitur:

Inter. Ut exponat nomen, cognomen, officium, aetatem confessarii, et locum seu sedem Confessionis; an sit presbyter saecularis vel Regularis, et quatenus etc.
Resp...

Inter. Ut exponat seriatim, sincere et clare ea omnia, quae in sacramentali confessione vel antea vel postea vel occasione confessionis audierit a confessario praedicto minus honesta: vel an ab eodem aliquid cum ipsa inhoneste actum fuerit nutibus, tactibus seu opere, et quatenus etc.

Notandum: hoc loco iudex solerte curabit ut referantur iisdem verbis, quibus confessarius usus fuerit, sermones turpes, seductiones, invitamenta conveniendi in aliquem locum ad malum finem, aliaque omnia, quae crimen sollicitationis constituunt, adhibita vernacula lingua in qua responsiones sedulo et iuxta veritatem exarabuntur; animum addat examinatae, si animadvertat, eam nimio timore aut verecundia a veritate patefacienda praepediri, eidem suadens omnia inviolabili secreto premia esse. Denique exquiret tempus a quo sollicitationes inceperint, quamdiu perduraverint, quoties repetitae, quibus verbis et actibus malum finem redolentibus expressae fuerint. Cavebit diligenter ab exquirendo consensu ipsius examinatae in sollicitationem, et a quacumque interrogatione, quae desiderium prodeat cognoscendi eiusdem peccata.

Inter. An sciat vel dici audierit praedictum confessarium alias poenitentes sollicitasse ad turpia; et quatenus eas nominet (atque hic iubebit nomen, cognomen, et saltem indicia clariora, quibus aliae personae sollicitatae detegi possint).

Notandum: Si forte inducantur aliae personae sollicitatae, erit ipsius iudicis eas prudenter advocare, et singillatim examinare iuxta formam superius expositam.
Resp...

Inter. De fama praedicti confessarii tam apud se quam apud alios? *Resp...*

Inter. An praedicta deposuerit ex iustitiae et veritatis amore, vel potius ex aliquo inimicitiae vel odii affectu, et quatenus etc. *Resp...*

Quibus habitis et acceptatis dimissa fuit iurata de silentio servando iterum tactis SS. Dei Evangeliiis, eique perlecto suo examine in confirmationem praemissorum se subscripsit (si fuerit illiterata, dicatur) et cum scribere nesciret fecit signum Crucis.

(Subscriptio personae examinatae)

Acta sunt haec per me N. N. Cancellarium vel Notarium ad hunc actum assumptum».

4. Instr. «Instructionis S. Romanae», 6.VIII.1897¹⁷¹

«I. Instructionis S. Romanae et Universalis Inquisitionis circa observantiam Apostolicae Constitutionis “Sacramentum Poenitentiae” N. 10 praecipitur ut, *antequam contra denunciatum procedatur, perspectum exploratumque iudici esse debeat, quod mulieres vel viri denunciantes sint boni nominis, neque ad accusandum vel inimicitia vel alio humano affectu adducti fuerint.*

II. Praeceptum huiusmodi, uti omnia quae ad huius Supremi Tribunalis procedendi rationem spectant, strictissimi iuris censendum est, ita ut, eo neglecto, ad ulteriora procedi nequeat.

III. Nec sufficit ut id utcumque, sed omnino necesse est ut certa iudiciali forma iudici innotescat; quod propria dictione: “*diligentias circa denunciatum eiusque denunciantes peragere*” significari in foro S. Officii usus obtinuit.

IV. Iamvero cum non semper nec ab omnibus vel tantum post longum tempus, cum nempe testimoniorum receptio difficilis et quandoque impossibilis est, Supremum hoc Tribunal id servari perspexerit, hanc ad rem Instructionem, pro Rmorum Ordinariorum norma, edendam mandavit.

V. Ordinarius igitur toties quoties aliquam de infando sollicitationis crimine denunciationem acceperit, illico ad diligentias procedet. Ad quem finem vel per se vel per sacerdotem a se *specialiter* delegatum advocabit (separatim scilicet, et qua decet circumspectione) duos testes, quantum fieri poterit, ex coetu ecclesiastico, utcumque vero omni exceptione maiores, qui bene noverint tum denunciatum, tum omnes et singulos denunciantes, eosque, sub sanctitate iuramenti de veritate dicenda et de secreto S. Officii servando, iudicialiter interrogabit, testimonium scripto referens, iuxta insequentem formulam; utriusque vero testimonii atque una simul respectivae denunciationis authenticum exemplum directe tutaque via ad hanc Supremam Congregationem quamprimum transmittet.

VI. Dictum est: vel per se vel per sacerdotem a se *specialiter* delegatum; nihil enim prohibet quominus, rationabili ex causa, pio alicui docto ac prudenti Sacerdoti id muneris Ordinarius demandare valeat; *speciali* tamen ei in singulis casibus delegatione impertita, eique antea delato iureiurando de munere fideliter obeundo et de secreto S. Officii servando.

VII. Quod si inveniri nequeant duo tantum testes qui noverint una simul denunciatum et omnes et singulos denunciantes, plures vocari debent. Tot nempe hoc in casu testes ut supra, vocandi erunt, quot oportebit ut duplex quoad denunciatum et unumquemque denunciantem habeatur testimonium.

VIII. Quoties autem iuramentum de secreto servando et, pro diversis casibus, de veritate dicenda vel de munere fideliter obeundo deferendum sit, iuramentum ipsum semper et ab omnibus, etiam sacerdotibus, *tactis SS. Dei Evangelii et non aliter*, praestandum erit. In Ordinarii vero potestate erit, siquidem pro rerum, locorum aut personarum adiunctis necessarium vel expediens iudicaverit, excommuni-

171. Instrucción con normas a tener en cuenta en las causas de sollicitación. Cfr. ASS 30 (1897-1898) 249-251.

cationem ipso facto incurrendam et Rom. Pont. speciali modo reservatam violatoribus comminari.

IX. Sequitur interrogationis formula.

Die... mense... anno...

Vocatus personaliter comparuit coram me infrascripto Episcopo... (*notetur nomen dioecesis. Delegatus autem dicat: coram me infrascripto a r. p. d. Episcopo... ad hunc actum tantum specialiter delegato) sistente in... (notetur locus ubi negotium geritur).*

N... N... (*nomen, cognomen et qualitates testis conventi*) qui, delato ei iuramento veritatis dicendae, quod praestitit tactis SS. Dei Evangeliiis, fuit per me

1. Interrogatus: Utrum noverit Sacerdotem N... N...? (*nomen cognomen et qualitates denunciati*). Respondit: ... (*exscribatur lingua qua utitur testis, eius responsio*).

2. Interrogatus: Quenam sit huiusce Sacerdotis vitae ratio, quinam mores, quenam penes populum existimatio? Respondit: ...

3. Interrogatus: Utrum noverit viros vel, ut plurimum, mulieres NN... NN...? (*nomen, cognomen et qualitates uniuscuiusque denunciantis*). Respondit: ...

4. Interrogatus: Quenam sit uniuscuiusque eorum vitae ratio, quinam mores, quenam penes populum existimatio? Respondit: ...

5. Interrogatus: Utrum eos censeat fide dignos, vel contra mentiendi, calumniandi in iudicio, et etiam peierandi capaces eos existimet? Respondit: ...

6. Interrogatus: Utrum sciat, num forte inter eos et praefatum Sacerdotem ulla umquam exstiterit odii vel inimicitiarum causa? Respondit: ...

Tunc, delato ei iuramento de secreto S. Officii servando, quod praestitit ut supra, dimissus fuit, et antequam discederet, in confirmationem praemissorum se subscripsit.

Subscriptio autographa testis vel eius signum crucis.

Acta sunt haec per me N... N... (*nomen, cognomen et qualitates Episcopi vel eius Delegati qui testimonium recepit*).

Datum Romae die 6 Augusti 1897. L. M. Card. Parocchi»



BIBLIOGRAFÍA

I. FUENTES

Acta Apostolica Sedis, Commentarium Officiale, Romae 1909-1998; *Actae Sanctae Sedis*, Romae 1865-1908; BENEDICTO XIV: Const. Ap. *Sacramentum Poenitentiae*, 1.VI.1741: AAS 9 (1917) *pars II* 505-508; IDEM, Const. Ap. *Etsi Pastoralis*, 26.V.1742: P. GASPARRI, *Fontes*, I, n. 32; IDEM, *De Synodo diocesana*, Editio novissima, Tipographia Bassanensi 1747; *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Auctoritate Ioannis Pauli Pp. II promulgatus: AAS 82 (1990) 1031-1363; *Codex Iuris Canonici*, Auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgatus: AAS 75 (1983) *pars II*; *Codex Iuris Canonici*, Pii X Pontificis Maximus iussu digestus-Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus: AAS 9 (1917) *pars II*; COLLECTANEA S. CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDEI, Romae 1907, 2 vol.; GASPARRI, P., *Codicis Iuris Canonici Fontes*, Roma 1947, 9 vol.; GREGORIO XV, Const. Ap. *Universi Dominici gregis*, 30.VIII.1622: P. GASPARRI, *Fontes*, I, n. 201; HEFELE, J.-LECCLERCQ, H., *Historie des Concilies*, Paris 1908, 11 vol.; JUAN PABLO II, Const. Ap. *Pastor Bonus*, 28.VI.1988: AAS 80 (1988) 841-934; *Magnum Bullarium Romanum. Bullarum Privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum Amplissima collectio*, Romae 1745-Graz 1965, 13 vol.; MANSI, J., *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, ed. Parisiis, 1901-1927-Graz, 1960-1961, 53 vol.; OCHOA, X., *Leges Ecclesiae*, Roma 1917-1985, 6 vol.; PABLO VI, Const. Ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15.VIII.1967: AAS 59 (1967) 885-928; IDEM, *Lettera al Maestro Generale dell'Ordine dei Predicatori*, 26.III.1966: AAS 58 (1966) 292-294; IDEM, m. p. *Integrae Servandae*, 7.XII.1965: AAS 57 (1965) 952-955; PAULO III, Const. Ap. *Licet ab initio*, 21.VII.1542: *Magnum Bullarium Romanum*, IV, *pars I*, 211-212; Pío X, Const. Ap. *Sapienti Consilio*, 29.VI.1908: AAS 1 (1909) 7-58; *Ordo servandus in Sacriis Congregationibus, Tribunalibus, Officiis Romanae Curiae*. *Pars altera. Normae peculiare*. 29.IX.1908: AAS 1 (1909) 59-108; PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICIS ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Nuntia*, 1975-1990; PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICIS RECOGNOSCENDO, *Communicationes*, 1969-1997; SAGRADA CONGREGACIÓN DE PROPAGANDA FIDEI, Instr. ad Vic. Ap. Cochinchin, 26.VIII.1775: P. GASPARRI, *Fontes*, VII, n. 4568; SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instr. *Dopo esservi havuta*, 27.IX.1624: J. PIGNATELLI, *Consultationes canonicae*, Coloniae Allobrogum 1718, I, sent. 104, 126-127; IDEM, Instr. *Accioche più fundatamente*, 17.VII.1627: J. PIGNATELLI, *Consultationes canonicae*, Coloniae Allobrogum 1718, I, sent. 104, 127-128; IDEM, Decr. *Cum me instante*, 11.II.1661: I. ORTEGA UHINK, *De delicto sollicitationis: evolutio historica, documenta, commentarius*, Washington 1954, 55-57; IDEM, Decr., 24.IX.1665: P. GASPARRI, *Fontes*, IV, n. 734; IDEM, Instr. *Si fá un memoriale*, 1669: J. PIGNATELLI, *Consultationes canonicae*, Coloniae Allobrogum 1718, I, sent. 104, 128-129; IDEM, Decr., 13.VI.1710: P. GASPARRI, *Fontes*, IV, n. 775; IDEM, Instr. *Questa sacra Congregazione*, 7.VII.1725: U. GIRALDI, *Expositio Iuris Pontifici iuxta recentiore Ecclesiae disciplinam in duas partes distribuita*, Romae 1830, 642; IDEM, Instr. *La Santità*, 23.III.1726: U. GIRALDI, *Expositio Iuris Pontifici...*, 642-643; IDEM, Decr. *Con tal congiuntura*, 14.VII.1753: U. GIRALDI, *Expositio Iuris Pontifici...*, 642-643; IDEM, Instr. *Quae Supremus Pontifex*, 20.II.1867:

ASS 3 (1867) 499-506; IDEM, Instr. *Non raro*, 20.VII.1890: ASS 25 (1892-1893) 451-454; IDEM, Instr. *Instructionis S. Romanae*, 6.VIII.1897, ASS 30 (1897-1898), 249-251; IDEM, Decr. *In Congregatione Generali*, 15.V.1901: ASS 34 (1901/2) 383-384; IDEM, *Normae quaedam de agendi ratione confessoriorum in interrogandis et instruendis fidelibus circa VI Decaligi praeceptum*, 16.V.1943: A. YANGUAS, *De quibusdam Sti Officii normis super agendi ratione confessoriorum circa VI Decalogi praeceptum*, en «Revista Española de Derecho Canónico» 2 (1947) 565-569; SECRETARÍA DE ESTADO, Instr. *Secreta continere*, 4.II.1974: AAS 66 (1974) 89-92; *Regolamento Generale della Curia Romana*, 4.II.1992: AAS 84 (1992) 201-267; SÍNODO DE LOS OBISPOS 1967, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant: Communicationes*, 1 (1969), 83; SIXTO V, Const. Ap. *Immensa Aeterni Dei*: *Magnum Bullarium Romanum*, IV, pars IV, 392-401.

II. AUTORES

ALCANIA CANOSA, C., *Nuova agendi ratio in doctrinam examinem*, en «Revista Española de Derecho Canónico» 28 (1972) 61-91; ALONSO, S.-CABREROS, M.-GARCÍA BARBERENA, T., *Comentarios al Código de Derecho Canónico con el texto legal latino y castellano*, Madrid 1964, 4 vol.; ÁLVAREZ-MENÉNDEZ, S., *La reforma de la Congregación del Santo Oficio*, en «Revista Española de Derecho Canónico» 21 (1966) 99-116; ARIAS, J., *Comentario al c. 1387*: Instituto Martín de Azpilcueta (ed.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y anotada*, 5.ª ed., Pamplona 1992; IDEM, *Comentario al c. 1390 § 1*: Instituto Martín de Azpilcueta (Ed.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y anotada*, 5.ª ed., Pamplona 1992; ARRIETA, J.I., *La reforma de la Curia Romana*, en «Ius Canonicum» 29 (1989) 185-204; IDEM, *Const. Ap. Pastor Bonus*, en VV.AA., *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Milano 1997, 168-373; ARROBA CONDE, M.J., *Diritto processuale canonico*, Roma 1993; AZNAR GIL, F., *Comentario al c. 1387: Código de Derecho Canónico, edición bilingüe y comentada*, 5.ª ed., Salamanca 1985; IDEM, *Comentario al c. 1390 § 1: Código de Derecho Canónico, edición bilingüe y comentada*, 5.ª ed., Salamanca 1985; BERTOLINO, R., *La tutela dei diritti nella Chiesa. Dal vecchio al nuovo codice di diritto canonico*, Torino 1983; BERUTTI, C., *De Curia Romana notulae historico-exegetico-practicae*, Romae 1952; BLAT, A., *Commentarium textus codicis iuris canonici*, Romae 1924, 5 vol.; BORRAS, A., *Les sanctions dans l'Église*, Paris 1990; BOUIX, D., *Tractatus de Curia Romana*, Parisiis 1880; IDEM, *Tractatus de Iudiciis Ecclesiasticis*, Parisiis 1884; BUCCERONI, I., *Commentarius in Constitutionem Benedicti XIV Sacramentum poenitentiae secundum omnes decisiones sacrarum Romanae Congregationum*, Romae 1888; IDEM, *Commentarii De Casibus reservatis, De Censuris, De C. Pii IX Apostolicae Sedis, De C. Benedicti XIV Sacramentum Poenitentiae, De absolutione danda, differenda, deneganda*, Romae 1899; CABREROS DE ANTA, M., *Comentarios al Motu Proprio Integrae Sevendae*, en *Derecho Canonico Postconciliar*, Salamanca 1967, 2.ª ed. 69-70; IDEM, *Comentarios a la Constitución Apostólica Regimine Universae Ecclesiasticae*, en *Derecho Canonico Postconciliar*, Salamanca 1976, 6.ª ed. 308-356; CALABRESE, A., *Diritto penale canonico*, Frascati 1988; IDEM, *Comentario al c. 1390 § 1*: MARZOA, A.-MIRAS, J.-RODRÍGUEZ-OCAÑA, R.

(Ed.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996, IV/1, 564-567; CALABUIG REVERT, J.J., *Procedimientos judiciales eclesiásticos según las normas generales del Codex Iuris Canonici*, Madrid 1923; CAPPELLO, F.M., *De Curia Romana iuxta reformationem a Pio X sapientissime inductam*, Romae 1911; IDEM, *De censuris*, Taurini-Romae 1950; IDEM, *Tractatus canonico-moralis. De sacramentis*, Taurini-Romae 1953, 5 vol.; IDEM, *Summa Iuris Canonici*, Taurini-Romae 1961, 3 vol.; CHELODI, I-CIPROTTI, P., *Ius canonicum. De delictis et poenis et de iudiciis criminalibus*, Vicenza 1943; CHIAPPETTA, L., *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, Napoli 1988, 2 vol.; COCCOPALMERIO, F., *La normativa penale della Chiesa*, en E. CAPPELLINI (Ed.), *La normativa del nuovo Codice*, Brescia, 1983, 297-343; CONTE A CORONATA, M., *Institutiones Iuris Canonici*, Taurini-Romae 1955, 4 vol.; IDEM, *De delictis et poenis*, Roma 1961; D'ONORIO, J.B., *Le Pape et le Gouvernement de l'Église*, Paris 1992; DALPIAZ, V., *De abusu matrimonii et crimine sollicitationis*, en «Apollinaris» 6 (1933) 244-249; DE DIEGO-LORA, C., *Procedimientos para el examen y juicio de doctrinas*, en «Ius Canonicum» 14 (1974) 149-203; IDEM, *Comentario al c. 1608*: MARZOA, A.-MIRAS, J.-RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (Ed.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996, IV/2, 1537-1550; DE LUCA, I.B., *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus, XV, II, Relatio Romanae curiae forensis*, Lugduni 1617; DE PAOLIS, V., *Il processo penale*, en AA.VV., *Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano 1984; IDEM, *De sanctionibus in Ecclesia. Adnotationes in codicem Liber VI*, Romae 1986; IDEM, *De delictis contra sanctitatem sacramenti poenitentiae*, en «Periodica» 79 (1990) 175-218; IDEM, *Il processo penale giudiziale*, en AA.VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992; IDEM, *Delitti contro il sesto comandamento*, en «Periodica» 82 (1993) 293-316; IDEM, *La collaborazione tra i dicasteri della Curia Romana e la Congregazione per la Dottrina della Fede*, en *Magister canonistarum: estudios con motivo de la concesión al Prof. Dr. Urbano Navarrete S.I. del doctorado Honoris causa*, Salamanca 1994; IDEM, *Comentario al c. 1387*: MARZOA, A.-MIRAS, J.-RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (Ed.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996, IV/1, 557-558; IDEM, *La collocazione della Congregazione per la Dottrina della Fede nella Curia Romana e la Ratio Agendi per l'Esame delle dottrine*, en «Periodica» 86 (1997) 571-613; DEL AMO, L., *Comentario al c. 1560*: Instituto Martín de Azpilcueta (Ed.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y anotada*, 5.ª ed., Pamplona 1992; DEL RE, N., *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1970; DELGADO, G., *La Curia Romana. El Gobierno central de la Iglesia*, Pamplona 1973; DELLA ROCCA, F., *Institutiones de Derecho Procesal Canónico*, Buenos Aires 1950; IDEM, *Instituzioni di Diritto penale canonico*, Torino 1961; DI MATTIA, G., *Sostanza e forma nel nuovo diritto penale canonico*, en *Il nuovo codice di diritto canonico: novità, motivazione, significato*, Roma 1983; EGAN, E.M., *I processi speciali*, en *Il nuovo codice di diritto canonico: novità, motivazione, significato*, Roma 1983; ERRÁZURIZ, C.J., *La protezione giurico-penale dell'autenticità della fede*, en «Monitor Ecclesiasticus» 114 (1989) 113-131; FERRARIS, L., *Prompta Bibliotheca Canonica Iurica Moralis Theologica necnon Ascetica Polemica Rubricistica Historica*, Romae 1885-1899, 7 vol.; FERRERES, J.B., *La Curia Romana según la novísima disciplina decretada por Pio X*, Madrid 1911; IDEM, *Institutiones canónicas*, Barcelona 1926; FERRETTO, G., *La riforma del Beato Pio X*, en «Apollinaris» 25 (1952) 35-84;

GARCÍA BARBERENA, T., *Comentarios al Código de Derecho Canónico con el texto legal latino y castellano*, IV: cánón 2368, Madrid 1964; GARCÍA FAÍLDE, J.J., *Nuevo Derecho Procesal Canónico. Estudio sistemático-análítico comparado*, Salamanca 1995, 3.^a ed. revisada y ampliada; GICNAC, J., *Compendium Iuris Canonici ad usum cleri canadensis*, Quebec 1901; GIL DE LAS HERAS, F., *Comentario al c. 1560*, MARZOA, A.-MIRAS, J.-RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (Ed.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996, IV/2, 1356-1358; GIRALDI, U., *Expositio Iuris Pontifici iuxta recentiore Ecclesiae disciplinam in duas partes distribuita*, Romae 1830, 3 vol.; GOYENCHE, S., *Tribunalia et officia (innovazione post Const. Sapienti Consilio)*, en «Appollinaris» 25 (1952) 123-139; GREEN, T.J., *Comentario al c. 1387: The Code of Canon Law. A text and commentary*, London 1985, 927; IDEM, *Comentario al c. 1390 § 1: The Code of Canon Law. A text and commentary*, London 1985, 928; GUTIÉRREZ, J.L., *La Curia Romana ante la nueva codificación*, en «Ius Canonicum» 23 (1983) 527-546; HALICZER, S., *Sexuality in the Confessional: a sacrament profaned*, New York 1996; HIZETTE, J.E., *Tractatus de casibus reservatis Romano Pontifici et episcopo Namurcensi*, Namurci 1901; HUELS, J.M., *The correction and punishment of a diocesan Bishop*, en «The Jurist» 49 (1989) 507-542; ICARD, H.J., *Praelectiones Iuris Canonici*, Parisiis 1893, 3 vol.; INGELS, G., *Processes which govern. The application of penalties*, en *Clergy procedural handbook*, Washington 1992; INSTRUCTION DE LA S. CONGRÉGATION DE L'INQUISITION TOUCHANT LA DÉNONCIATION DES CONFESSEURS, en «Nouvelle Revue Théologique» 8 (1876) 322-336; JONE, H., *Commentarium in Codicem Iuris Canonici*, Paderborn 1950, 3 vol.; LARRAONA, A.A., *De SS. Congregationum, Tribunalium et Officiorum consuetudine et interna ordinatione particolare Const. Sapienti Consilio*, en «Appollinaris» 25 (1952) 87-121; LEGA, M.-BARTOCETTI, V., *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, Romae 1950, 3 vol.; LEGA, M., *Praelectiones in textum iuris canonici. De iudiciis ecclesiasticis*, Romae 1896-1901, 4 vol.; IDEM, *Praelectiones in textum iuris canonici. De delictis et poenis*, Romae 1910; LINENBERGER, H., *The false denunciation of an innocent confessor*, Washington 1949; LLOBELL, J., *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, Zaragoza 1985; IDEM, *Comentario al c. 1412*, MARZOA, A.-MIRAS, J.-RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996, IV/1, 731-732; IDEM, *I delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede*, en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Le sanzioni nella Chiesa. XXIII Incontro di studio. Abbazia di Maguzzano, 1-5 luglio 1996*, Milano 1997, 237-278; IDEM, *Sulla promulgazione delle norme processuali proprie della Congregazione per la Dottrina della Fede in materia penale*, en «Ius Ecclesiae» 9 (1997) 281-301; LÓPEZ, U., *De crimine pessimo inter alios*, en «Periodica» 27 (1938) 32-35; LÜDICKE, K., *Comentario al c. 1387 y al c. 1390 § 1: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, Essen 1988-1998; MANZANARES, J., *Nuevo derecho parroquial*, Madrid 1990, 285-289; MAROTO, P., *De vi ignorantie quoad falsam delationem, qua Sacerdos innocens accusatur de crimine sollicitationis*, en «Appollinaris» 5 (1932) 96-105; MARTIN, J., *Comentario al c. 1390 § 1: The Code of Canon Law Letter & Spirit*, London 1995, 801; MARZOA, A.-MIRAS, J.-RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996, 5 vol.; MASCHAT, R.-GIRALDI, U., *Cursus Iuris Canonici, iuxta methodum decretalium Gregorii IX*, Matriti 1865; MICHIELS, G., *De delictis et poenis*, Romae 1961; MILLER, R., *The Congregation for the Doctrine of the Faith:*

its origin, concept, and the development of its competency, Washington 1975; MONETA, P., *La giustizia nella Chiesa*, Bologna 1993; MONTINI, G.P., *La tutela penale del sacramento della Penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388)*, en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Le sanzioni nella Chiesa. XXIII Incontro di studio. Abbazia di Maguzzano, 1-5 luglio 1996*, Milano 1997, 213-235; MUNIZ, T., *Procedimientos eclesiásticos*, Sevilla 1925, 3 vol.; NAVARRETE, U., *Commentarium in litteras Aspotolicas Integrae Sevandae*, en «Periodica» 55 (1966) 614-652; NAZ, R. (Ed.), *Dictionnaire de Droit Canonique*, Paris 1937, 7 vol.; IDEM, *Traité de Droit Canonique*, 12.^a ed., Paris 1954, 4 vol.; NIGRO, F., *Comentarios al c. 1387 y al c. 1390 § 1*: P.V. PINTO (Ed.), *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985; NOLDIN, H.-SCHMITT, A., *Summa Theologiae Moralis iuxta Codicem Iuris Canonici*, Barcelona 1951, 3 vol.; NOVAL, I., *Commentarium Codicis Iuris Canonici, Liber IV. De Processibus*, Agustae Taurinorum-Romae 1920; OJETTI, B., *De Romana Curia. Commentarium in constitutionem Apostolica Sapienti Consilio seu de Curiae plana reformatione*, Romae 1910; ORTEGA UHINK, I., *De delicto sollicitationis: evolutio historica, documenta, commentarius*, Washington 1954; PELLÉ, P., *Le Droit pénal de l'Eglise*, Paris 1939; PIGNATELLI, J., *Consultationes canonicae*, Coloniae Allobrogum 1718, 11 vol.; PINTO, P.V., *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985; IDEM, *I processi nel codice di diritto canonico. Commenti sistematico al lib. VII*, Città del Vaticano 1993; PISTOCCHI, M., *I canoni penali del Codice Ecclesiastico. Esposti e commentati*, Torino-Roma, 1925; POSPISHIL, V.J., *Eastern Catholic Church Law*, New York 1996; PRÜMER, D.M., *Manuale Iuris Canonici*, Freiburg 1922, 3 vol.; IDEM, *Manuale Theologiae Moralis*, Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae 1961; REGATILLO, E., *Institutiones Iuris Canonici*, Santander 1951, 2 vol.; IDEM, *La reforma de la Sagrada Congregación del Santo Oficio*, en «Sal Terrae» 54 (1966) 745-752; ROBERTI, F., *De delictis et poenis*, Roma 1930; IDEM, *De Processibus*, Civitate Vaticana 1946, 2 vol.; IDEM, *De Curia Romana ante pianam reformatione*, en «Apollinaris» 25 (1952) 13-34; RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *Comentario al c. 1598*: MARZOA, A.-MIRAS, J.-RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (Ed.), *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996, IV/2, 1481-1487; SALUCCI, R., *Il diritto penale secondo il codice di diritto canonico*, Subiaco 1930, 2 vol.; SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, J., *Pablo VI y la reforma de la Curia Romana*, Salamanca 1967; SANCHÍS, J.M., *L'indagine previa al processo penale*, en «Ius Ecclesiae» 4 (1992) 511-550; IDEM, *La legge penale ed il precetto penale*, Milano 1993; SERRANO RUIZ, J.M., *Comentario al c. 1560*: P.V. PINTO (Ed.), *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985, 815-816; SILVESTRELLI, A., *La Congregazione della Dottrina della Fede*, en AA.VV., *La Curia Romana nella Const. Apost. Pastor Bonus*, Città del Vaticano 1990, 225-237; SOLE, I., *De delictis et poenis*, Romae 1920; SOLFERINO, A., *Aspetti della tutela penale del sacramento della confessione*, en «Il Diritto Ecclesiastico» 2 (1994) 601-605; IDEM, *I diritti fondamentali del fedele: il diritto alla buona fama e all'intimità*, en R. BERTOLINO-S. GHERRO-G. LO CASTRO (a cura di), *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino, 1996, 372-382; SOUTO, J.A., *La reforma de la Curia Romana*, en «Ius Canonicum» 8 (1968) 547-568; TOMKO, J., *Agendi ratio in doctrinam examine*, en «Monitor Ecclesiasticus» 96 (1971) 163-170; VERMEERSCH, A.-CREUSEN, J., *Epitome Iuris Canonici*, Pasissis-Bruxellis 1956, 3 vol.; VV.AA., *Código de Cánones de las Iglesias Orientales*, edición bilingüe y comentada, Madrid 1994; IDEM, *Código de Derecho Canónico y le-*

gislación complementaria, texto latino y versión castellana, con jurisprudencia y comentarios, Madrid 1969; IDEM, *Code de Droit Canonique Annoté*, Paris, 1989; IDEM, *Código de Derecho Canónico*, edición bilingüe y anotada, 5.ª ed., Pamplona 1992; IDEM, *Código de Derecho Canónico*, edición bilingüe y comentada, 5.ª ed., Salamanca 1985; IDEM, *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, Essen 1988-1998, 4 vol.; IDEM, *The Code of Canon Law a Text and commentary*, London 1985; IDEM, *The Code of Canon Law Letter & Spirit*, London 1995; IDEM, *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Milano 1997; IDEM, *Manual de Derecho Canónico*, 2.ª ed., Pamplona 1991; IDEM, *Nuevo derecho parroquial*, Madrid 1990; WERNZ, F.X., *Ius Decretalium*, Romae 1904, 6 vol.; WERNZ, F.X.-VIDAL, P., *Ius Canonicum*, Romae 1923, 7 vol.; YAGUAS, A., *De crimine pessimo et de competentia S. Officii relate ad illud*, en «Revista Española de Derecho Canónico» 1 (1946) 427-439; IDEM, *De quibusdam Sti Officii normis super agendi ratione confessoriorum circa VI Decagoli preceptum*, en «Revista Española de Derecho Canónico» 2 (1947) 565-604.



ÍNDICE DE LA TESIS DOCTORAL

ABREVIATURAS. INTRODUCCIÓN. CAPÍTULO I. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA CONGREGACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA FE. I. DE LAS PRIMERAS COMPETENCIAS HASTA LA REFORMA DE JUAN PABLO II. 1. La organización de la Curia Romana por Sixto V: Const. Ap. *Immensa aeterna Dei*. 2. La reforma piana de la Curia Romana (Cons. Ap. *Sapienti Consilio*) y el Código de Derecho Canónico de 1917. 3. La reforma de la Sagrada Congregación del Santo Oficio (m. p. *Integrae Servendae*) y de la Curia Romana (Const. Ap. *Regimini Universae Ecclesiae*) promovida por Pablo VI. II. LA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE EN LA REFORMA DE LA CURIA ROMANA EFECTUADA POR JUAN PABLO II: CONST. AP. *PASTOR BONUS*. 1. Breve estudio de los artículos que regulan la Congregación para la Doctrina de la Fe. 2. Delimitación de la competencia penal y procesal. 3. Nuestra opinión. CAPÍTULO II. LA ABSOLUCIÓN DEL CÓMPLICE EN PECADO CONTRA EL SEXTO MANDAMIENTO DEL DECÁLOGO. I. INTRODUCCIÓN. II. NOTAS QUE CONFIGURAN EL PECADO DE ABSOLUCIÓN DEL CÓMPLICE EN PECADO CONTRA EL SEXTO MANDAMIENTO. 1. Fuera de peligro de muerte. a) El sacerdote. b) El cómplice. c) La materia: «in peccato turpi». 2. En peligro de muerte. 3. Algunos supuestos en relación a la absolución del cómplice. a). Privación *in perpetuo* de la facultad de absolver. b) Absolución impartida en buena fe del confesor. c) Absolución en buena fe del penitente. III. EL DELITO DE ABSOLUCIÓN DEL CÓMPLICE EN PECADO CONTRA EL SEXTO MANDAMIENTO. 1. Regulación del tipo delictivo en el Código de 1917. a) Notas que configuran el delito. b) Tipificación del delito figuras delictivas. c) Sanción penal. 2. Regulación del tipo delictivo en el CIC. a) Formación del canon. b) Notas que configuran el delito. c) Figuras delictivas. d) Sanción penal. IV. EL DELITO DE ABSOLUCIÓN DEL CÓMPLICE EN EL «CODEX CANONUM ECCLESIAE ORIENTALIS». V. RESERVA DE LA COMPETENCIA A LA CONGREGACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA FE. CAPÍTULO III. ATENTADO DE ABSOLUCIÓN SACRAMENTAL Y DE OÍR CONFESIONES. I. INTRODUCCIÓN. II. LOS DELITOS DE ATENTADO DE ABSOLUCIÓN SACRAMENTAL Y DE OÍR CONFESIONES. 1. Regulación en el Código pío-benedictino. a) Atentado de confesión sacramental. b) Carencia de facultades en el confesor. c) Sanción penal. 2. Tipificación y sanción en el vigente CIC. a) Atentar la absolución sacramental. b) Escuchar las confesiones sacramentales. c) Sanción penal. d) Algunas consideraciones de orden general. III. EL DELITO DE SIMULACIÓN DE SACRAMENTOS EN EL DERECHO ORIENTAL. IV. LA RESERVA DE LA COMPETENCIA A LA CONGREGACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA FE. CAPÍTULO IV. LA SOLICITACIÓN EN CONFESIÓN. I. INTRODUCCIÓN. II. REGULACIÓN EN EL CIC DE 1917. 1. Noción. 2. Tipificación del delito. a) Objeto de la solicitud. b) Sujetos del delito de solicitud activo y pasivo. c) Nexos con el sacramento de la reconciliación. 3. Sanción penal. 4. Denuncia del delito de solicitud. III. TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO EN EL CIC VIGENTE. 1. Tipificación del delito. a) Objeto de la solicitud. b) Sujeto activo y pasivo. c) Nexos con la confesión. 2. Sanción penal. IV. EL DELITO DE SOLICITACIÓN EN LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO ORIENTAL. 1. Situación previa al CCEO. 2. Regulación del delito en el CCEO. V. LA RESERVA DE LA COMPETENCIA A LA CDF. CAPÍTULO V. LA VIOLACIÓN DEL SIGILO SACRAMENTAL. I. INTRODUCCIÓN. II. OBLIGACIÓN DE GUARDAR EL SIGILO SACRAMENTAL. 1. Elementos que integran la ley del sigilo sacramental. a) Obligación de guardar secreto. b) Raíz de la obligación. c) Objeto del sigilo. d). Sujeto

de la obligación de guardar el sigilo. e) La violación del sigilo sacramental. f) Licencia para hablar de lo manifestado en confesión. 2. La obligación de guardar secreto de lo oído en confesión por otras personas distintas del confesor. 3. La prohibición de usar la ciencia adquirida por confesión: el sigilo sacramental *late sensu*. III. EL DELITO DE LA VIOLACIÓN DEL SIGILO SACRAMENTAL. 1. Notas del delito. a) Confesor. b) Sigilo sacramental. c) Violación directa e indirecta. 2. Sanción penal. a) Violación directa del sigilo sacramental. b) Violación del secreto natural. 3. Otras protecciones del secreto de lo tratado en el sacramento de la penitencia. IV. LA TUTELA DEL SIGILO SACRAMENTAL EN EL CCEO. 1. La obligación de guardar secreto de lo tratado en confesión. 2. El delito de violación del sigilo sacramental. 3. ¿El Decreto de 1988 de la CDF alcanza también a los fieles de rito oriental?. V. RESERVA DE LA COMPETENCIA A LA CDF. 1. La Instr. «*Naturalem et divinam*». 2. La reserva de competencia desde el CIC 17. 3. La reserva de competencia en el ámbito del CIC. 4. La reserva de competencia en relación a los católicos de rito oriental. CAPÍTULO VI. FALSA DENUNCIA DE SOLICITACIÓN EN CONFESIÓN. I. INTRODUCCIÓN. II. EL PECADO DE FALSA DENUNCIA DE SOLICITACIÓN. 1. Regulación previa al CIC vigente. a) Los elementos del pecado. b) La absolución del pecado. c) La ignorancia de la reserva del pecado. 2. Situación en el Código 1983. a) Los elementos del pecado. b) La absolución del pecado. III. EL DELITO DE FALSA DENUNCIA DE SOLICITACIÓN. 1. Regulación del tipo delictivo previa a la actualmente vigente. a) Elementos del delito. b) Sanción penal. c) Absolución de la censura. 2. Regulación del delito en el CIC. a) Elementos del delito. b) Sanción penal. c) Remisión de la pena y absolución del pecado. IV. RELACIÓN ENTRE EL PECADO Y EL DELITO DE FALSA DENUNCIA DE SOLICITACIÓN. 1. Descripción de la acción en el Código pío-benedictino. a) Diferencia entre «sacerdos» (c. 894 CIC 17) y «confesarius» (c. 2363 CIC 17). b) Contraste entre «accuso» (c. 894 CIC 17) y «denuntio» (c. 2363 CIC 17). 2. Descripción de la acción en el CCEO. V. EL DELITO DE FALSA DENUNCIA EN EL DERECHO ORIENTAL. 1. Regulación previa al CCEO. 2. Normativa del CCEO. a) El pecado de falsa denuncia de solicitud. b) El delito de falsa denuncia. VI. LA RESERVA DE LA COMPETENCIA A LA CDF. CAPÍTULO VII. LAS CAUSAS DE SOLICITACIÓN EN CONFESIÓN. I. INTRODUCCIÓN. II. FASE INQUISITIVA. 1. La denuncia. a) La Instr. «*Quae Supremus Pontifex*». b) Regulación en el CIC 17 y en la Instr. de 1922. 2. Testimonio «*de bono nominis*». 3. Interrogatorios dispuestos por la Instr. «*Non raro*». 4. Conclusión de la fase inquisitiva. III. EL PROCESO PENAL ESPECIAL. 1. Algunas normas de procedimiento dictadas por la CDF. a) Citación e interrogatorio del sacerdote inculcado. b) Pruebas. c) Derecho de defensa. d) Obligación estricta de guardar secreto. 2. El proceso ante el tribunal diocesano, según las normas del CIC 17. 3. Proceso ante el tribunal de la Congregación. IV. SENTENCIA. 1. Espontánea confesión. 2. Casos especiales. 3. Notificación de la sentencia dada por la CDF. 4. Apelación de la sentencia. V. CONSIDERACIONES GENERALES A LA LUZ DE LA ACTUAL NORMATIVA VIGENTE. 1. Desarrollo de los procesos criminales ante los tribunales diocesanos. a) Tribunal unipersonal o colegiado. b) Derecho de defensa. c) Incorporación de las pruebas acusatorias y participación en los interrogatorios. d) La sentencia. 2. Constitución del tribunal y desarrollo de los procesos criminales en la CDF. 3. Propuestas conclusivas. CONCLUSIONES. ANEXOS. 1. Instr. *Dopo esservi havuta*, 27.IX.1624. 2. Instr. *Accioche più fundatamente*, 17.VII.1627. 3. Decr. *Cum me instante*, 11.II.1661. 4. Instr. *Si fà un memoriale*, 1669. 5. Decr. *Essendo a noi*, 10.III.1677. 6. Instr. *Questa sacra Congregazione*, 7.VII.1725. 7. Instr. *La Santità*,



- 23.III.1726. 8. BENEDICTO XIV, Const. Ap. *Sacramentum Poenitentiae*, 1.VI.1741. 9. Decr. *Con tal congiuntura*, 14.VII.1753. 10. Instr. *Quae Supremus Pontifex*, 20.II.1867. 11. Instr. *Non raro*, 20.VII.1890. 12. Instr. *Instructionis S. Romanae*, 6.VIII.1897. 13. Decr. *In Congregatione Generali*, 15.V.1901. 14. Instr. *Naturalem et divinam*, 9.VI.1915. 15. Decr. *Cum ex expresso*, 21.VII.1934. BIBLIOGRAFÍA